



RUBEN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN
RESTITUCION DE TIERRAS DE MONTERÍA
Carrera 4 No. 33_72 _Centro Comercial Montecentro Oficinas 5
y 6_ Montería_ Córdoba
Expediente Radicado: 23_0 001_31_21_001_2018_ 0049_00

Montería, junio (28) de junio de dos mil diecinueve (2019)

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

PROCESO: ESPECIAL DE FORMALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS FORSOZAMENTE.

DEMANDANTE. : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS _UAEGRTD_ Dirección Territorial _ Antioquia.

NÚMERO DE SOLICITUDES: Una (1) en este proceso.

NOMBRE DEL SOLICITANTE. PEDRO PABLO GALINDO RAMOS. C.C. No 15.301.191 Caucaasia_ Antioquia

LUGAR DE UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE PARCELA OBJETO DE RESTITUCIÓN: La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucaasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M²

NÚMERO DE SOLICITUD RESTITUIDA: Una (1).

NÚMERO DE SOLICITUDES DENEGADAS: 0

COMPENSACIONES: No

1.) _ ASUNTO

Se procede a **DICTAR SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA** dentro del **PROCESO ESPECIAL DE FORMALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS FORSOZAMENTE**, invocado por la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS _UAEGRTD_ Dirección Territorial _ Córdoba**. Representada legalmente por el Director Territorial de conformidad con el trámite establecido en el Capítulo IV de la Ley 1448 de 2011. (**Ley de víctimas y Restitución de Tierras.**) Se trata

de una (1) solicitud o reclamación de Restitución de Tierras a favor del señor **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucaasia_ Antioquia, en relación con el predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucaasia _ Departamento de Antioquia, área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caucaasia

2.)_ ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en adelante UNIDAD o UAEGRTD fue creada por el Artículo 103 Ley 1448 de 2011, es una Entidad especializada, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Con autonomía administrativa y personería jurídica, tiene como objetivo fundamental servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados en los términos establecidos en la Ley 1448 de 2011. (Artículo 2 decreto 4801 de 2011). Y entre sus funciones está la de diseñar, administrar y conservar el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y para este caso (Artículo 105.5 de la Ley 1448 de 2011). La de tramitar ante las autoridades los procesos de restitución de predios de los despojados o de formalización de predios abandonados, en nombre de los titulares de la acción y cuando así lo prevea la ley.

El decreto 4801 de 2011, reiteró ésta facultad, la que por acto DG _001 de 2012, dispuso que su ejercicio le corresponde a los directores territoriales de la Unidad; siendo la de Córdoba, la que por resolución RA 03402 de 14 de diciembre de 2015, aceptó la solicitud de representación invocada por el solicitante.

2.1)_PRINCIPALES

2.1.1)_ Declarar que el solicitante Pedro Pablo Galindo Ramos. C.C. No 15.301.191 y la señora Modesta Del Carmen Zabaleta Alean , compañera permanente al momento del abandono, son titulares del derecho fundamental a la restitución de tierras, en relación con el predio descrito en el numeral 1.1 de la presente solicitud, en los términos de los artículos 3, 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011.

2.1.2)_ Ordenar la restitución material a favor del solicitante Pedro Pablo Galindo Ramos y la señora Modesta Del Carmen Zabaleta Alean compañera permanente al momento del abandono, del predio denominado a Esperanza, ubicado en el departamento de Antioquia, municipio de Caucaasia, corregimiento de Cacerí, vereda La Unión, identificado en el primer acápite de la presente solicitud de restitución, cuya extensión corresponde a 35 hectáreas 6.750 metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 91 parágrafo 4º de la Ley 1448 de 2011.

2.1.3)_ Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Caucaasia, inscribir la sentencia en los términos señalados en el literal c) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, en el folio de matrículas N? 015-13909, aplicando el criterio de gratuidad al que se refiere el parágrafo 1* del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

2.1.4)_ Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Caucaasia, la cancelación de todo antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales; en el evento que sea contraria al derecho de restitución, de conformidad con el literal d) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

2.1.5)_ Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Caucaasia, en los términos previstos en el literal n) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, cancelar cualquier derecho real que figure a favor de terceros sobre el inmueble objeto de restitución en virtud de cualquier

obligación civil, comercial, administrativa o tributaria en el evento que sea contraria al derecho de restitución.

2.1.6) _ Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Cauca, actualizar el folio de matrícula No. 015-13909, en cuanto a su área, linderos y el titular de derecho, con base en la información predial indicada en el fallo, y efectuar su remisión al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

2.1.7)_ Ordenar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC/Catastro de Antioquia, que con base en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909, actualizado Por la oficina de registro de instrumentos públicos de Cauca, o adelante la actuación catastral que corresponda.

2.1.8)_ Ordenar el acompañamiento y colaboración de la Fuerza Pública en la diligencia de entrega material del bien a restituir de acuerdo al literal o) del artículo 91 de la ley 1448 de 2011.

2.1.9)_ Condenar en costas y demás condenas a la parte vencida conforme lo señala el literal s) y q) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011

2.1.10)_ Cobijar con la medida de protección preceptuada en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, el predio objeto de restitución, denominado "La Esperanza", ubicado en la vereda La Unión, corregimiento Cacerí, municipio de Cauca, departamento de Antioquia.

2.2) _ Pretensiones Subsidiarias

2.2.1)_ En caso de encontrarse probados los literales del artículo 97, proceda a ordenar alternativas de restitución en compensación con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, en los términos del artículo 97 de la Ley 1448 de 2011.

2.2.2) _ Si se encontrare procedente la pretensión anterior, se ordene la transferencia del bien despojado o abandonado, al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con lo dispuesto en el literal k. del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

2.3) _ Pretensiones Complementarias

2.3.1)_ Reconocer el alivio de pasivos por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones tuviere lugar, En consecuencia, ordenar y advertir a los entes territoriales su aplicación sobre el predio objeto de restitución como medida con efecto reparador y de conformidad con los artículos 121 de la ley 1448 de 2011 y 139 del decreto 4800 de 2011.

2.3.2)_ Ordenar al Fondo de la UAEGRTD aliviar las deudas que por concepto de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, los solicitantes adeuden a las empresas prestadoras de los mismos, por el no pago de los períodos correspondientes al tiempo transcurrido entre la fecha del hecho victimizante y la sentencia de restitución de tierras.

2.3.3)_ Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que incluya por una sola vez a los solicitantes, junto a sus núcleos familiares, en el programa de proyectos productivos, una vez sea verificada la entrega o el goce material del predio objeto de la presente solicitud. Lo anterior, a efectos de que implemente la creación de proyectos productivos y brinde la asistencia técnica correspondiente, teniendo en cuenta, por una parte, la vocación y el uso racional del suelo, así como sus posibles afectaciones, y por otra, las actividades que desarrolla la población beneficiaria, con el fin de asegurar su restablecimiento económico.

2.3.4)_ Ordenar al SENA el desarrollo de los componentes de formación productiva, en los proyectos de explotación de economía campesina, a efectos de fortalecer y acompañar los proyectos productivos que la Unidad de Restitución de Tierras implemente y desarrolle en los predios reclamados en restitución.

2.3.5)_ Ordenar a la Unidad Para Víctimas, la entrega de la indemnización integral al señor Pedro Pablo Galindo Ramos y su núcleo familiar por su condición de víctimas de desplazamiento forzado.

2.3.6)_ Ordenar a la Secretaría Municipal de Salud de Caucasia, o a la que haga sus veces, realizar la verificación de la afiliación de los solicitantes y sus grupos familiares en el Sistema General de Salud, y disponga en lo pertinente para los que no se hayan incluido, su ingreso al sistema y la atención integral que requieran.

2.3.7)_ Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud para que en el marco de sus competencias y responsabilidades, ejerza vigilancia y control frente a las gestiones de afiliación y prestación de servicios en atención y/o rehabilitación en salud física y mental en favor de los beneficiarios de tales componentes.

2.3.8)_ Por conducto de las Secretarías de Educación Departamental y Municipal se promuevan las estrategias de permanencia escolar y la priorización de la atención de la población iletrada restituida de conformidad con lo establecido en el artículo 91 parágrafos 1 y 2 del Decreto 4800 de 2011.

2.3.9)_ Por conducto de la Unidad de Atención y Reparación Integral las Víctimas, se promueva la suscripción de convenios con las entidades educativas para que se establezcan los procesos de selección que faciliten el acceso de las víctimas a la educación superior y la participación e forma prioritaria en las líneas y modalidades especiales de crédito educativo y de subsidios financiados por la nación a cargo del ICETEX.

2.3.10)_ Ordenar al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la inclusión de los restituidos en los programas de formación de acuerdo a sus necesidades, en los términos del artículo 130 de la Ley 1448 de 2011.

2.3.11)_ Ordenar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que en el marco de sus competencias otorgue de manera prioritaria y preta preferente subsidio de vivienda de interés social rural en favor de los hogares identificados en la sentencia proferida, previa priorización efectuada por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, al tenor del Artículo 2.15.2.3.1 del Decreto 1071 de 2015.

Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior, en virtud de la responsabilidad establecida en los Artículos 123 y siguientes de la Ley 1448 de 2011, sírvase requerir a la entidad operadora o quien haga sus veces, para que proceda a adelantar todos los trámites necesarios para la materialización de los subsidios de vivienda de interés social rural en favor de los hogares referidos, una vez realizada la entrega material del predio.

2.3.12)_ Proferir todas aquellas órdenes que sean necesarias para garantizarla efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los solicitantes de restitución, en razón a lo establecido en el literal p) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

2.3.13)_ Ordenar al Centro Nacional de Memoria Histórica que, bajo sus principios rectores y lineamientos internos en la materia, se documenten los hechos victimizantes ocurridos en la microzona RA 00790 correspondiente al municipio de Caucasia, corregimiento Cacerí, vereda la Unión, a través del acopio del presente expediente judicial y la sistematización de los hechos allí referidos. Para tal efecto, envíese el expediente al archivo de Derechos Humanos del Centro de Memorial Histórica.

2.3.14)_ Ordenar la suspensión de todos los procesos o actuaciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza que adelanten otras autoridades públicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre los predios objeto de esta acción, atendiendo a las disposiciones del artículo 86 literal c. ibídem.

2.3.15)_ Que se requiera al Consejo Superior de la Judicatura, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC/Catastro de Antioquia, a la Agencia Nacional de Tierras ANT, para que informen a los Jueces, a los Magistrados, a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, a las Notarías y a sus dependencias u oficinas territoriales, sobre

las actuaciones o requerimientos del proceso de restitución, lo anterior en los términos del artículo 96 de la Ley 1448 de 2011.

2.3.16)_ Que se concentren en este trámite especial todos los procesos o actuaciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza que adelanten otras autoridades públicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre los predios objeto de esta acción.

2.3.17)_ De conformidad con lo contemplado en el inciso 3, del artículo 87 de la Ley 1448 de 2011, se sirva nombrar representante judicial, para los terceros determinados a que haya lugar y que resulten de la verificación que se realice a los folios de matrícula inmobiliaria que correspondan.

2.3.18)_ Vincular a la Agencia Nacional de Minería.ANM, con el fin de tierras de que rindan informes sobre el área que se traslapa con las afectaciones relacionadas a continuación ,a partir de la georreferenciación realizada por la Unidad respecto del predio, y a su vez indiquen sobre las implicaciones que puedan tener este tipo de actividades sobre los inmuebles, una vez se aporte esta información emítanse las órdenes necesarias para garantizar el uso sostenible del mismo: Directorio: Minería; Fuente: Agencia Nacional de Minería, Catastro Minero Colombiano; Nombre del shape: Títulos _Vigentes Atributos clave: CODEXP: KBB-08421; COD_RMN: KBB-08421; Minerales: de Oro y sus Concentrados; Modalidad: Contrato de Concesión(L 685); Titulares: (15898559) Iván de Jesús Díaz Iglesias. Fecha INSC: 19/10/2012 fecha TERM: 18/10/2042

2.3.19)_ Ordenar al SNARIV, la activación de las rutas de protección al adulto mayor para que se atienda de manera integral al señor Pedro Pablo Galindo Ramos y Modesta Del Carmen Zabaleta Alean, en los programas que para este fin tengan las entidades encargadas.

2.3.20)_ Ordenar a la Secretaría de Salud del Municipio de Caucasia inscribir a JAIRO ANTONIO GALINDO ZABALETA. C.C. No. 1.038.1 10.035 en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad e incorporarlo en los programas municipales dirigidos a este grupo poblacional. De acuerdo a los requerimientos establecidos en la Ley 1346 del 2009, Ley Estatutaria 1618 del 2013 y el CONPES166del 2013.

2.3.21)_ Dictar todas las medidas de protección, asistencia, atención y reparación que contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación al señor JAIRO ANTONIO GALINDO ZABALETA, en situación de discapacidad, en los términos señalados en el art. 9 de la Ley 1346 del 2009, el art. 14 de la Ley 1618 del 2013, la Ley 1287 del 2009 y la Ley 982 del 2005.

2.3.22)_ Ordenar a la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas y a la Secretaría de Salud del municipio de Caucasia, que inicien en favor del ciudadano JAIRO ANTONIO GALINDO ZABALETA la gestión de medidas de rehabilitación que garanticen la recuperación física, cognitiva y psicológica, de conformidad con lo establecido en el art. 82 de la Ley 1448 de 2011, así como garantizar que en dichas medidas se dé cumplimiento con los ajustes razonables requeridos para la atención integral de las personas en condición de discapacidad, tal como lo señalan las Leyes 1346 del 2009, la Ley 1618 del 2013, la Ley 1287 del 2009, y la Ley 982 del 2005.

2.3.23)_ Ordenar a la Secretaría de Salud del municipio de Caucasia en el marco del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI, a la Unidad Especial para la Atención Integral del Victimas en el marco de las medidas de reparación integral para las personas en condición de discapacidad y a la Unidad de Restitución de Tierras en el marco de las acciones post-fallo la ejecución de una propuesta o ruta de articulación A que garantice la atención integral para el restablecimiento del derechos del ciudadano JAIRO ANTONIO GALINDO ZABALETA con discapacidad y su grupo familiar.

2.3.24)_ Ordenar que para efectos de permitir el acceso del ciudadano JAIRO ANTONIO GALINDO ZABALETA al programa de proyectos productivos a cargo del Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, se tengan en cuenta sus necesidades especiales de acuerdo a su condición de discapacidad.

2.4)_ Solicitudes Especiales

2.4.1)_ Con fundamento en el principio de confidencialidad a que hace alusión el artículo 29 de la Ley 1448 de 2011, solicito de manera respetuosa que en la publicación de la admisión de la solicitud de restitución, de que trata el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, sean omitidos el nombre e identificación de los solicitantes.

2.4.2)_ Atender con prelación la solicitud aquí elevada, dado que involucra a mujeres víctimas del conflicto armado, con fundamento en los artículos 114 y 115 de la Ley 1448 de 2011.

2.4.3)_ Dada la especialidad del caso, y de no presentarse oposición dentro de la etapa judicial, solicito se prescinda del término de la etapa probatoria ,al tenor de lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 88 Ley 1448 de 2011, y en consecuencia, proceda a dictar sentencia.

2.4.4)_ Ordenar la suspensión de los procesos declarativos, sucesorios, ejecutivos, divisorios, de deslinde y amojonamiento, y, abreviados que se hubieran iniciado ante la Justicia ordinaria en relación con el predio cuya restitución se solicita, así como los procesos notariales y administrativos que afecten el predio, salvo el proceso de expropiación, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 86 de la Ley 1448 del 2011.

3.)_ FUNDAMENTOS FACTICOS

Realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas_ Dirección Territorial Córdoba, en la solicitud de formalización presentada ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, al introducir los hechos que originaron el abandono y despojo del predio solicitado, ubicada en zona rural del Municipio de Caucasia Departamento de Antioquia; un recuento en relación al contexto de violencia en el municipio de Caucasia. Con el fin de sustentar la reclamación efectuada. De la siguiente manera:

3.1)_ CONTEXTO DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA_ANTIOQUIA.

3.1)_ Contexto de las dinámicas que dieron lugar al abandono del que trata esta solicitud de restitución.

Esta Unidad en ejercicio de la competencia conferida por la Ley 1448 de 2011 (artículo 105No. 3º), consistente en acopiar las pruebas de despojos y abandono forzados, procedió a desarrollar las labores tendientes a elaborar un Documento de Análisis de Contexto, entendido como un ejercicio de investigación, cuyo propósito es reconstruir las dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales que propiciaron el proceso de despojo o abandono en una microzona específica, donde se ubican los predios solicitados en restitución de los que trata la presente demanda.

En la argumentación, esta Unidad retoma los análisis de la Corte Constitucional en la sentencia C-781 de 2012, donde estableció que la expresión “con ocasión del conflicto armado interno”, “(...) no circunscribe el conflicto armado a situaciones de confrontación armada, o actividades de determinados actores armados o en ciertas zonas geográficas, y en esa medida resulta compatible con la protección constitucional de las víctimas”. En efecto, de acuerdo a la Corte, la expresión ‘con ocasión del conflicto armado’ debe tener una interpretación amplia que permita incluir “toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado colombiano”¹.

En este sentido, la Dirección Territorial Córdoba, Oficina Caucasia de la Unidad de Restitución de Tierras elaboró el Documento de Análisis de Contexto de la Microzona establecida en la Resolución No. RA 1950 del 05 de agosto de 2016 , ubicada en el departamento Antioquia, municipio Caucasia, zona urbana del municipio y las Veredas El Brasil, La Catalina, La Corcobada, Campo Alegre, El

¹ Pastoral Social. Comentarios a la Ley de víctimas y restitución de tierras. Ed. Legis. Bogotá 2014. Pp 9.

Descanso, El Tigre, Guartinajo, La Arenosa, La Escuela, La Virgen, Las Malvinas, Las Parcelas, La Ilusión, Margento, Cacerí y Puerto Triana.

3.1.1)_ Expansión y consolidación del paramilitarismo en Caucasia , los Bloques Mineros (BM) y Central Bolívar (BCB) de las AUC y su injerencia en el Abandono/Despojo de Tierras 1997 – 2005.

Los años comprendidos entre 1996 y 2005 han sido reconocidos como el periodo de masificación del conflicto armado en Colombia. En el transcurso de esa década la confrontación armada sostenida entre guerrillas, paramilitares y agentes del Estado repercutió en el aumento de casos de desplazamiento de población, y la apropiación ilegal de tierras, ya fuera por despojo o por abandono².

Como se reseñó anteriormente, durante la primera mitad de la década de los noventa la presencia del paramilitarismo en la región del Bajo Cauca estuvo representada por distintas agrupaciones de autodefensas algunas de ellas financiadas por ganaderos de la región y otras funcionales al narcotráfico. El fenómeno del paramilitarismo adquirió una nueva dimensión a partir de 1997; año en que se articularon las AUC, ya que según Marín ésta confederación de bloques de paramilitares «marcó una diferencia notable frente a las tradicionales formas de actuar de estas agrupaciones»³. Tal como lo refieren Reyes, Duica y Pedraza, las AUC surgieron con «el propósito de expandir dominios territoriales y controlar los recursos de poder de las regiones»⁴, no en vano estos autores se refieren a las AUC como «empresas armadas de conquista territorial», cuyos intereses están orientados hacia el dominio de territorios y poblaciones, la depredación de los presupuestos, el usufructo del narcotráfico y el contrabando, y la apropiación forzada de la tierra⁵.

Las AUC irrumpieron en Caucasia y municipios vecinos del Bajo Cauca a través del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar. Estas dos estructuras paramilitares recurrieron a la violencia masiva e indiscriminada para consolidar e imponer un nuevo orden en la región, en ese sentido, de manera paralela a la confrontación directa con la guerrilla en el marco de las disputas territoriales, «los paramilitares desarrollaron un patrón armado ilegal que no solo les proporcionó beneficios en materia de control militar sino que también les permitió permear el ámbito político (participación en procesos electorales), social y económico (inversión de capitales ilícitos en negocios lícitos para el lavado de los mismos) consolidando un modelo económico y político en la subregión»⁶.

3.1.2)_ Los Bloques Mineros y Central Bolívar, narcotráfico y control territorial en Caucasia desde 1997

El municipio de Caucasia se constituyó en zona donde confluyeron dos de los principales líderes de las AUC, “Cuco Vanoy” y “Macaco”, quienes antes de asumir como líderes paramilitares habían adquirido una trayectoria criminal vinculada con el narcotráfico. De acuerdo con Cristancho, en el caso concreto de “Cuco Vanoy”, previo a la comandancia del Bloque Mineros él se había desempeñado como jefe de un grupo de seguridad privada de esmeralderos y había sido integrante del cartel de Medellín⁷.

² USAID, Fundación Ideas para la Paz. (2015). Barreras de acceso a la justicia. Caracterización en función del contexto. En Institucionalidad Socavada. Justicia local, territorio y conflicto. Bogota.

³ Marín, L. (enero – julio de 2012). Centro de consolidación regional de Bajo Cauca: desplazamiento forzado, dinámicas de violencia y acciones de estado. FORUM. Revista del Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional, Sede Medellín(3), 151 – 182.

⁴ Reyes, A., Duica, L., & Pedraza, W. (s.f.). El despojo de tierras por paramilitares en Colombia

⁵ *Ibíd.*

⁶ Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. «Informe de Riesgo N° 016-09A.I.» 2009.

⁷ Cristancho, A. (18 de Julio de 2015). El narco fantasma Parte 1. La cara oculta del Bloque Central Bolívar. Recuperado el 28 de Agosto de 2016, de <http://pacifista.co/el-narco-fantasma-parte-1/>

A propósito de los antecedentes del Bloque Mineros, en la Sentencia de imputación de cargos a alias "Cuco Vanoy" se señaló que en una reunión celebrada en Caucasia a la que acudieron algunos habitantes de la región junto con algunos ganaderos y mineros⁸, Vanoy se presentó como comandante Cuco Vanoy de Puerto Boyacá e informó que iba de parte de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. En esa reunión en la que se discutió sobre la problemática generada por los hurtos y secuestros consumados por parte de la guerrilla y la necesidad de conformar un grupo armado que respondiera a estas situaciones, Vanoy les dijo que para que la organización funcionara sería necesaria la financiación, fue allí donde los mineros asistentes a la reunión sugirieron que para no ser descubiertos se hicieran llamar "Mineros" de donde surgió el nombre con el que este bloque paramilitar se dio a conocer entre la población⁹.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, se ha determinado que en el Bajo Cauca la conformación del Bloque Mineros contó con la alianza de mineros, ganaderos y narcotraficantes¹⁰, ya que la financiación de este grupo paramilitar se realizó principalmente con recursos provenientes del narcotráfico, pero también con los aportes que hacían ganaderos, mineros e incluso madereros de la región donde este bloque ejerció control¹¹.

Pese a la estrecha relación de los jefes paramilitares del Bloque Mineros con algunos de los dueños de minas en el Bajo Cauca y personas dedicadas a la ganadería¹², la principal fuente de financiación de este bloque de las AUC fue el narcotráfico¹³. A propósito de esto en la Sentencia de imputación de cargos contra Cuco Vanoy se lee que:

«El Bloque Mineros de las A.U.C., fue una estructura armada que como actividad principal de financiamiento adoptó el tráfico de estupefacientes para obtener recursos a efectos de garantizar su hegemonía y expansión en el Bajo Cauca antioqueño, a través de la adquisición de medios logísticos, material de intendencia, avituallamiento de las tropas, etc., actividad bajo la cual prosperó todo tipo de delitos, especialmente homicidios; desplazamientos; torturas; desapariciones forzadas; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; tráfico de estupefacientes; conservación o financiación de plantaciones; destinación ilícita de muebles o inmuebles; entre otros. En efecto, en el entramado del proceso productivo del narcotráfico, desde el cultivo y cosecha de las plantas de coca; la fabricación de la pasta base en las llamadas "cocinas"; la refinación de la cocaína en laboratorios hasta la distribución y venta de la sustancia, se ejecutó por los integrantes del Bloque Mineros de las A.U.C. una política de exterminio en cada uno de los niveles de producción señalados, ya que en las regiones de influencia del mismo no sólo se apoyó y auspició el cultivo de plantas de coca, sino que era obligatorio para quienes concurrían a ello (desde los raspachines hasta quienes elaboraban la pasta base de coca) a comercializar únicamente con miembros del bloque o personas que reconocidamente compraban para venderle finalmente a la misma estructura militar»¹⁴.

Carlos Mario Jiménez Naranjo alias "Macaco" fue otro de los narcotraficantes que fungió como comandante paramilitar en el Bajo Cauca. Tal como lo refiere la revista Semana, desde muy joven "Macaco" se involucró con el narcotráfico, sus orígenes en el negocio de la droga están ligados al cartel del norte del Valle¹⁵; en el marco del desarrollo de sus actividades delictivas se tiene certeza de que al menos desde 1997 desarrollaba actividades relacionadas con el tráfico de narcóticos a los Estados Unidos a través de México¹⁶. De acuerdo con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

⁸ Con relación a este mismo episodio Verdad Abierta señala que fueron los mineros de Caucasia quienes buscaron protección de las autodefensas, incluso se informa que las minas más importantes de este municipio fueron utilizadas como bases por parte de este grupo paramilitar. (Verdad Abierta.com. Así fue el dominio del Bloque Mineros en el Bajo Cauca.» 26 de Diciembre de 2011. <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/3767-los-apoyos-legales-del-bloque-mineros-en-antioquia/> (último acceso: 19 de Abril de 2016).

⁹ Sentencia. Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy". 110016000253200680018 (Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz, 2 de Febrero de 2015).

¹⁰ El Contexto de los crímenes, Boletín 4 (Sala de Justicia y Paz). Obtenido de http://www.saladepazmedellin.com/boletin/numero4/contexto_de_los_crmenes.pdf

¹¹ Verdad Abierta. (26 de Diciembre de 2011). Así fue el dominio del Bloque Mineros en el Bajo Cauca. Recuperado el 20 de Octubre de 2016, de <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/3767-los-apoyos-legales-del-bloque-mineros-en-antioquia/>

¹² *Ibíd.*

¹³ Sentencia Ramiro Vanoy Murillo alias "Cuco Vanoy", Radicado: 110016000253200680018 (Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz 2 de Febrero de 2015).

¹⁴ *Ibíd.*

¹⁵ Semana. (9 de Junio de 2007). *¿El intocable?* Recuperado el 21 de Octubre de 2016, de <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-intocable/86462-3>

¹⁶ Sentencia Rodrigo Pérez Alzate, 110016000253200680012 (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz 30 de Agosto de 2013).

Bogotá, desde su arribo al Bajo Cauca “Macaco” ya contaba con un grupo de seguridad personal al que se reconocía como los “Caparrapos”, que integrarían posteriormente al Bloque paramilitar que él comandó en esta región¹⁷.

En referencia al arribo de “Macaco” al Bajo Cauca y su vinculación con el paramilitarismo en esta región, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señaló que:

«Se expuso en el desarrollo de la audiencia, información y fuentes que apuntaban a que al interior de la cúpula de las AUC, concretamente Vicente Castaño, alias el Profe, financió la expansión territorial de los frentes y bloques paramilitares a través de la venta de franquicias a narcotraficantes. En este periodo de “venta de franquicias”, según la información de varios ex miembros de las AUC, llegaron a comandar estructuras narcotraficantes. Uno de los señalados concretamente es Carlos Mario Jiménez Naranjo, quien, por versiones escuchadas en audiencia, de narcotraficante paso a comandante paramilitar»¹⁸.

Según Cristancho, para narcotraficantes como “Macaco” la posibilidad de incluirse dentro de las AUC como comandantes de bloques paramilitares constituyó una inversión que les fue correspondida con la ganancia de territorios donde le usurparon el control de los cultivos de coca a la guerrilla¹⁹.

Sobre este aspecto –y de acuerdo con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá–, esta asociación entre el narcotráfico y el paramilitarismo resultó ventajosa para unos y otros, ya que con la venta de franquicias a los narcotraficantes, las autodefensas aseguraron territorios a través de la expansión de sus frentes y bloques paramilitares y de manera simultánea los narcotraficantes – como fue el caso de “Macaco”–, lograron camuflarse como paramilitares y como actores del conflicto armado interno²⁰.

En Antioquia la estructura paramilitar del BCB comandada por “Macaco” se expandió por distintas regiones. En el caso específico del Bajo Cauca el BCB tuvo injerencia a través del Frente Héroes de Zaragoza cuyas zonas de influencia fueron los municipios de Zaragoza, El Bagre, Cáceres, y parte rural de Cauca, y del Frente Autodefensas del Bajo Cauca Oriental que se articuló a partir del grupo de seguridad de los Caparrapos e hizo presencia principalmente en los municipios de Cauca y Cáceres²¹. El arribo de estas estructuras se asoció con algunas arbitrariedades y abusos de los que fueron víctimas los habitantes de la región tal como lo denunció un solicitante de la vereda Puerto Colombia al sur de Cauca.

«En el año 1997 se metieron los paramilitares de “Macaco”; ingresó un comandante que le decían Escamilla, llegó al negocio y se llevó a una de las muchachas del negocio y la amarró a un poste en Puerto Colombia, tuvimos que ir hasta ese sitio junto con el secretario de la Junta de Acción Comunal de Puerto Colombia y el presidente, y rescatamos a la niña, según la iba a matar porque esta no se quiso acostar con él»²².

A raíz de la primera expansión del Bloque Mineros para 1998 varias vías estaban bajo control de este grupo armado. La carretera Troncal desde Valdivia hasta Cauca era controlada por este bloque paramilitar con un grupo de hombres bajo el comando de Cesar Augusto Torres Lujan alias “Mono Vides”²³. Así mismo un solicitante que refirió haber sido víctima de un secuestro simple ese mismo año en el contexto de un retén paramilitar instalado en la vía que comunica a Cauca con vereda La Catalina señaló lo siguiente:

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Cristancho, A. (18 de Julio de 2015). *El narco fantasma Parte 1. La cara oculta del Bloque Central Bolívar*. Recuperado el 28 de Agosto de 2016, de <http://pacifista.co/el-narco-fantasma-parte-1/>

²⁰ Sentencia Rodrigo Pérez Alzate, 110016000253200680012 (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz 30 de Agosto de 2013).

²¹ Ibid.

²² ID: 168383: Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

²³ Sentencia Ramiro Vanoy Murillo alias “Cuco Vanoy”, Radicado: 110016000253200680018 (Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz 2 de Febrero de 2015).

«Nos encontrábamos en un caserío de nombre El Porvenir [a] un grupo de personas armadas, vestidos con uniformes militares que al parecer eran paramilitares de la zona y que nos impidieron continuar el camino para la finca porque acababan de dar de baja a unos sujetos que según ellos dijeron eran ladrones, [...] ese día alcance a ver una niña de escasos trece años y según lo alcance a escuchar era que la niña se había ido en compañía de los muchachos que estaban muertos [...], estábamos a borde de carretera y pude presenciar cuando los sujetos armados cada vez que pasaba un bus lo paraban, bajaban a la gente preguntaban a la niña si estaba alguno de los muchachos que se habían volado, a nosotros nos dejaron ir a las dos de la tarde por lo que nuestro secuestro se prolongó más o menos 24 horas, [...] de los sujetos que me secuestraron [...] recuerdo que mencionaban mucho a un alias “Mocho”, pero nunca lo vi»²⁴.

El control territorial ejercido por el Bloque Mineros en Caucaasia –incluido el caso urbano del municipio– llegó a ser habitual por lo cual durante algún periodo no resultaba extraño que algunos paramilitares se reunieran en lugares públicos como la Alcaldía Municipal o en ciertos sectores del barrio Pajonal, incluso en las zonas urbanas los lugares de refugio y encuentro fueron los hoteles, como fue el caso del Hotel Piscis que aparentemente era de propiedad de Jesús Emilio Gonzales, alias ‘Nilo’ a quien los paramilitares reconocían como el “Patrón”. También en Caucaasia más de diez fincas y minas auríferas (Malvinas, Barajas y El Aeropuerto) o estaderos como El Porvenir y Chambacú hicieron parte de los escenarios a los que acudían los paramilitares del Bloque Mineros para sus encuentros públicos²⁵. A propósito de algunos de estos lugares una solicitante refirió:

«Cuando yo salí [...] a trabajar ya esa gente (Paramilitares) estaba ahí, había paradores, ahí vivía un señor que se llamaba el “Mocho” y era de esa gente. Había una finca en el Porvenir y ellos se apoderaron de esa finca. La Fiscalía una vez entro ahí. Yo estaba muy pequeña pero me acuerdo de eso [...], los paramilitares habitaban las dos veredas (El Porvenir y Santo Domingo) [...]. Ellos mantenían en el restaurante Santo Domingo, uno veía muchas cosas en el parador, se decía que iba alguien en un carro lo bajaban y se lo llevaban y no se sabía más de ellos. Eso me daba mucho miedo»²⁶.

El control territorial que ejerció el Bloque Mineros en Caucaasia llegó a ser de tal magnitud que según José Gilberto García Masón quien fue uno de sus integrantes, «los paramilitares patrullaban armados por las calles de Caucaasia ante la mirada complaciente de la Policía»²⁷.

3.1.3)_ La confluencia del BCB, el Ejército y el ELN en el sur de Caucaasia, y el abandono de predios.

Pese a que durante la década de los 90 el paramilitarismo había logrado un fuerte control en Caucaasia, particularmente en lo que fue el casco urbano del municipio y las veredas localizadas hacia el norte; próximas con el departamento de Córdoba, hacia el sur de Caucaasia, especialmente en los corregimientos de Puerto Triana y Puerto Colombia limítrofes con los municipios de El Bagre y Zaragoza la presencia de la guerrilla que había sido constante contrastó con la expansión del paramilitarismo con consecuencias nefastas para la población. Como ha sido reiterado a lo largo del documento, la expansión territorial de los paramilitares se conjugó con la realización de actividades asociadas con el narcotráfico y en medio de esta situación varios habitantes de las regiones por donde se expandió el paramilitarismo fueron asesinados o debieron desplazarse. Un solicitante de la vereda La Jagua ubicada en el corregimiento de Puerto Triana al sur de Caucaasia refirió que:

«En el año 1998 ingresaron los paramilitares en la vereda y empezaron a hacer cocinas por esos lados, cuando ingresan los paramilitares se desapareció la guerrilla [...], empezaron a regarse gente

²⁴ ID: 128277. Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

²⁵ Verdad Abierta. (26 de Diciembre de 2011). Así fue el dominio del Bloque Mineros en el Bajo Cauca. Recuperado el 20 de Octubre de 2016, de <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/3767-los-apoyos-legales-del-bloque-mineros-en-antioquia/>

²⁶ ID: 124453. Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

²⁷El Contexto de los crímenes, Boletín 4 (Sala de Justicia y Paz). Obtenido de http://www.saladejusticiapazmedellin.com/boletin/numero4/contexto_de_los_crímenes.pdf

de esa, paramilitares en toda la vereda vigilando y entonces empezamos a tener mucho miedo [...], empezaron a quedarse y a matar gente de ahí de la vereda [...], ellos no le daban explicación a nadie sobre esas muertes, solamente los mataban y no le decían a nadie en la vereda, ya con el tiempo era que uno se daba cuenta de esas muertes, ellos duraron como 2 años ahí haciendo laboratorios como hasta el año 2001»²⁸.

En el transcurso de los últimos años de la década de los 90 el ingreso del BCB a las veredas del sur de Caucasia se traslapó con la presencia de la guerrilla y en ciertas regiones también con el Ejército, la confluencia de distintos actores armados sobre el territorio potencializó la violencia y sumió a los habitantes de la región en un escenario bélico en medio de los enfrentamientos armados y de señalamientos de colaboración con grupos adversarios que derivaron en el abandono de predios.

Para 1999 en la vereda Puerto Triana ubicada en el corregimiento del mismo nombre, el ELN perpetró la segunda de las masacres de las que se había tenido conocimiento en el municipio de Caucasia. Este evento ocurrió el día 24 de octubre y como resultado fueron asesinadas cuatro personas²⁹. La masacre ocurrió en un contexto de disputa territorial entre la guerrilla y los grupos paramilitares que hacía dos años atrás habían arribado al sector. Con posterioridad a los hechos algunos de los residentes abandonaron la región dentro de quienes se encuentra una solicitante de tierras que acudió ante la URT. A propósito de la masacre ella refirió lo siguiente:

«Por ahí a partir de la una de la tarde entró la guerrilla a ese pueblito, con lista en mano, tenían a muchas personas en esa lista, entre esas asesinaron a cuatro, tres vivientes de allá y un militar que lo bajaron de un carro y lo mataron [...], entre ellas a una sobrina de mi compañero, entonces ellos dijeron que no decían adiós sino un hasta luego porque tenían más personas anotadas en la lista, debido a eso todo el pueblo se vio en la obligación de salir y lo único [que] sacamos fue la ropita»³⁰.

Efectivamente tal como lo refieren algunos solicitantes, quienes no se desplazaron por motivo de la masacre, si lo hicieron como consecuencia de las amenazas que el ELN profirió con posterioridad y del asesinato de un habitante de la región a quienes los paramilitares acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Un comerciante que durante más de 20 años había vivido en Cacerí a pocos minutos de Puerto Triana refirió lo siguiente:

«Recibí una nota donde decía que debía abandonar en 24 horas la vereda de Cacerí, [...] esta información la dio el grupo guerrillero en el corregimiento de Puerto Triana el día antes, donde previamente habían asesinado a por lo menos cinco personas [...], luego de estos hechos el grupo armado manifestó que seguía para Cacerí y una de las personas que encabezaba la lista para asesinarle era yo [...], entonces yo me fui del lugar, inmediatamente recibí la nota manifesté que no necesitaba 24 horas y que me iba de inmediato»³¹.

Con posterioridad a la masacre perpetrada por el ELN, los paramilitares agudizaron la violencia a través del asesinato de personas de la región a quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla, y la consumación de otros actos. Un habitante de Puerto Triana que también se desplazó refirió que:

«Esa masacre la perpetraron guerrilleros del ELN, a raíz de ello, los paramilitares de la zona asesinaron a un médico que vivía en Puerto Triana, [...] se escuchó decir que los paramilitares lo acusaban de ser colaborador de la guerrilla, a raíz de eso Puerto Triana quedó solo, mi papá se vino como a los quince días, solo quedamos mi mamá, mi compañera, mi hijo [...] y yo, nosotros quedamos muy temerosos, en marzo de 2000, nos quemaron una casa que teníamos en la finca y que usábamos para albergar los trabajadores y las cosechas [...], eso fue de noche como a las 10, no supimos quien fue, a raíz de eso como a los 15 días nos salimos porque estábamos muy temerosos»³².

²⁸ ID: 160226. Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

²⁹ CNMH: Base de datos masacres 1980-2012. En: <http://www.centrodehistoria.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html> CNMH

³⁰ ID: 99642. Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

³¹ ID: 25726. Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

³² ID: 204474. Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

La arremetida violenta de los paramilitares se hizo extensiva a otras veredas del sur del municipio, un solicitante de Puerto Colombia refirió que: «Para el año de 2000 más o menos entraron los paramilitares a combatir la guerrilla, pero la cogieron también contra la gente, ellos mataban gente, amenazaban y señalaban a la gente de que eran colaboradores de la guerrilla, se les llevaban los animales y la comida a la gente»³³.

En referencia a acciones que involucraron a los tres actores armados en conflicto un solicitante que se desplazó desde la vereda de Puerto Colombia señaló lo siguiente:

«Nadie peleaba con nadie y aunque había presencia de la guerrilla [...] dicho grupo no se metía con nadie, dicha tranquilidad duró hasta los años 90, fechas para la cual entraron a la vereda el Ejército y los paramilitares, cuando el Ejército se posesionó en la vereda instaló un helipuerto en mi finca y bombardearon la zona [...], se dieron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y la guerrilla y los paramilitares lo cual complicó la zona pues la mayoría de la gente campesina salió de la vereda, un día [...] hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares a causa de lo cual murieron 6 paramilitares y 4 guerrilleros [...], pero la situación cada día se complicaba más, el Ejército me hizo salir todos los animales que yo tenía en la finca y los paramilitares por su parte atemorizaban a todos los campesinos de la zona tildándonos de guerrilleros, el día 25 de diciembre del año 2000 estando en el municipio de Caucasia me llamó un trabajador de la finca [...] para avisarme que por orden del señor Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” los paramilitares me habían quemado las seis casas de mi finca»³⁴.

En el paso de la década de los 90 al 2000 los hechos de violencia registrados en el sur de Caucasia involucraron la participación tanto de la guerrilla como de los paramilitares y del Ejército; grupos cuyas actuaciones en el marco del conflicto armado ocasionaron el desplazamiento de población con el consecuente abandono de predios. Para la misma época en las veredas ubicadas en el centro geográfico de Caucasia la dinámica del conflicto implicó la participación de otros actores que si bien hacían parte de la estructura paramilitar del BCB, su procedencia y modo de operación difirió con respecto a lo acontecido en el sur del municipio.

3.5) _ HECHOS ESPECÍFICOS SOLICITUD DE PEDRO PABLO GALINDO RAMOS

Del anterior contexto, tenemos que se derivan los siguientes hechos específicos que sustentan la presente solicitud y que narró el solicitante **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**, en esta Judicatura así:

En el año 2009, el señor Pedro Pablo Galindo Ramos y su familia se vieron obligados a abandonar el mencionado inmueble, como consecuencia del asesinato de que fueron víctimas dos (2) de sus hijos (Jorge Eliecer Galindo Zabaleta y Aníbal Antonio Galindo Zabaleta), hechos que se afirma ocurrieron dentro del mismo predio y que se atribuye al no pago oportuno de extorciones realizadas por grupos armados al margen de la ley.

Manifestó el solicitante que los paramilitares que operaban en la zona, acostumbraban a llevarse animales, entraban a la finca y simplemente se llevaban lo que necesitaban, principalmente las vacas, los marranos, las mulas y que cada mes tenía que dar la “Vacuna”, que era la suma de dos millones de pesos. Inicialmente, le exigían solo un millón de pesos, el cual pagó en tres ocasiones y posteriormente se los aumentaron a 2 millones.

³³ ID: 115939. Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

³⁴ ID: 148918. Expediente de solicitud de ingreso al registro de tierras despojadas y/o abandonadas.

Que debido al incremento del valor de la "Vacuna", le tocó solicitar un préstamo al Banco Agrario. De ese préstamo alcanzó a pagar la suma de \$1.500.000. Sin embargo, según quienes le exigían el dinero, quedaba adeudando una fuerte suma de dinero, razón por la cual, al regresar al predio por el dinero restante y no encontrar al solicitante, arremetieron en contra de tres (3) de sus hijos, que se encontraban desayunando, quitándoles la vida. Las personas fallecidas respondían a los nombres de Jorge Eliecer Galindo Zabaleta, Aníbal Antonio Galindo Zabaleta y Yudis del Rosario Galindo Zabaleta.

A raíz de lo ocurrido y de las posteriores amenazas que recibió para que abandonara el predio, decidió salir de la finca con su familia, lo que le causó una gran tristeza, teniendo que soportar además al año siguiente, el fallecimiento de otra de sus hijas Ludís del Rosario Galindo Zabaleta.

En la actualidad el solicitante vive con su compañera permanente, uno de sus hijos Walberto Enrique Galindo Zabaleta, el núcleo familiar de éste y tiene a cargo dos nietos cuyos padres fueron asesinados. Uno de ellos se encuentra en situación de discapacidad a causa de un accidente.

El día 23 de junio de 2010 el solicitante compareció a las instalaciones de la Personería Municipal de Cauca y realizó la declaración de desplazamiento.

El día 15 de agosto de 2013 el señor Pedro Pablo Galindo Ramos presentó ante la UAEGRTD solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

Surtida la actuación administrativa de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1071 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 440 de 2016, la UAEGRTD profirió Resolución RR 02472 de 19 de diciembre de 2017 mediante la cual inscribió el predio objeto de restitución en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a nombre del señor Pedro Pablo Galindo Ramos con C.C. 15.301.191.

El señor Pedro Pablo Galindo Ramos manifestó expresamente su consentimiento para que la UAEGRTD ejerciera la representación judicial para formular acción de restitución de tierras ante los Jueces Civiles Especializados en Restitución de Tierras de Montería.

4.)_ SITUACIÓN ESPECÍFICA DEL SOLICITANTE Y EL PREDIO O PARCELA RECLAMADA SEGÚN LA ENTIDAD DEMANDANTE.

El escrito introductorio relaciona individualmente la situación del reclamante en relación con el predio respectivo, relacionando las pruebas específicas, la forma como se vincula a la tierra, la condición de víctima, identificación de ella y su grupo familiar y la identificación del predio reclamado y su estado actual, para mejor comprensión de lo exigido en la solicitud, se transcribirán algunos apartes.

4.1)_ Solicitud de PEDRO PABLO GALINDO RAMOS. C.C. No 15.301.191 Cauca_ Antioquia. Adquirió el predio mediante adjudicación del antiguo Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras instalándose él y su núcleo familiar en el predio objeto de debate desde el año 1985 aproximadamente hasta el año 2009 en el que salió el solicitante con sus hijos debido al conflicto armado que acampaba en la zona, el solicitante de tuvo el predio junto a su núcleo familiar de manera pacífica e ininterrumpida hasta el momento del despojo.

Así mismo, se observa que los datos que se ven como fundamento de esta solicitud cumplen con los requisitos de temporalidad exigidos por la ley puesto que el despojo y consecuente desplazamiento ocurrió en el año 2009.

Al no encontrarse incurso el solicitante en las causales de exclusión señaladas en el artículo 12 del Decreto 4829 de 2011 y teniendo en cuenta las presiones a las que fue sometido el señor **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucaasia_ Antioquia por los grupos armados al margen de la ley que incursionaron en la zona.

4.1.1)_ Sobre la condición de Víctima y temporalidad de las violaciones de los derechos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 76 de la ley 1448 de 2011, y el artículo 18 numeral del Decreto 4829 de 2.011, tenemos que en este trámite administrativo se encuentra acreditado que: 1) Las circunstancias que rodearon el despojo del predio se presentaron después del año 1991. 2) La condición de Víctima del señor **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucaasia_ Antioquia. 3) Su identificación: Lo anterior se corrobora en las siguientes pruebas arrimadas al proceso.

4.1.2)_ La fecha del Despojo. En declaración rendida ante la UAEGRTD Dirección Territorial Antioquia y en interrogatorio de parte practicado por este Despacho la solicitante manifestó que se desplazó de la parcela que hoy reclama en el año 2009.

4.1.3)_ La condición de Víctima. Si bien el solicitante no se encuentra inscrito en el RUV, es necesario tener en cuenta que tal como lo ha afirmado la Corte Constitucional en la sentencia T-284 del 19 de abril de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) la inscripción en el RUV no es un acto constitutivo del desplazamiento forzado sino una herramienta técnica que busca identificar a la población y analizar la información de atención y seguimiento de los servicios prestados.

4.1.4)_ Identificación de la Víctima. En el trámite administrativo adelantado por la Unidad, la victima allegó copia de su cédula de ciudadanía, en la que se reportan los siguientes datos:

Nombres: **PEDRO PABLO**

Apellidos: **GALINDO RAMOS**

No Cédula. 15.301.191

Fecha y lugar de nacimiento: 29 de Junio de 1949 Sahagún, Córdoba

Fecha y lugar de expedición: 4 de noviembre de 1970 Medellín, Antioquia

En razón a lo expuesto, se tiene que existe prueba suficiente sobre la condición de víctima del solicitante los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2.011 y además están dados los requisitos de temporalidad exigidos por la ley.

4.1.5)_ Identificación del núcleo familiar de la Víctima al momento del Despojo y Abandono. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 y el numeral 3 del artículo 9 del Decreto 4829 de 2011, se describe el núcleo familiar del solicitante al momento de la ocurrencia de los hechos del despojo, de la siguiente forma:

Cuadro C_1

Núcleo familiar de la víctima al momento del abandono/despojo.

1° Nombre	2° Nombre	1° Apellido	2° Apellido	Edad	Vinculo	Presente al momento de la victimización	
						Si	no
Modesta	Del Carmen	Zabaleta	Alean	68 años	Compañera	X	

Ludis	Del Rosario	Galindo	Zabaleta		Hija (Fallecida)	x	
Jairo	Antonio	Galindo	zabaleta	18 años	Nieto	X	
Aníbal	Antonio	Galindo	Zabaleta		Hijo (Fallecido)	X	
Jorge	Eliecer	Galindo	Zabaleta		Hijo (Fallecido)	x	

4.1.6) _ Identificación físico jurídica del predio y calidad de la Víctima. El predio objeto de ésta solicitud está ubicado en la Vereda La Unión Corregimiento Cacerí_ Municipio de Caucasia_ Departamento de Antioquia, y se encuentra identificado e individualizado así:

CUADRO C_2

Solicitantes	Compañera Permanente	Nombre Y ubicación del predio.	C.T.L. de Matrícula Inmobiliaria No.	Cédula Catastral del Inmueble	Área Superficial Georreferenciada	Titular Derecho de Dominio
PEDRO PABLO GALINDO RAMOS. C.C. No. 15.301.191 Caucasia_ Antioquia	Modesta del Carmen Zabaleta Alean. C.C No 21.638.884 Sahagún_Córdoba.	La Esperanza Vereda La Unión- corregimiento de Cacerí _ Caucasia _ Antioquia	015-13909 ORIP_Caucasia.	05154200 40000002 00010000 000000	35 hectáreas 6.750 M ²	Pedro Pablo Galindo Ramos.

4.1.7)_ Del propietario, poseedor u ocupante que se halle en el predio y su Intervención en el proceso. De acuerdo con el Certificado de Tradición y Libertad de matrícula inmobiliaria No. 015-13909, actualmente figura como propietario del bien inmueble el señor **Pedro Pablo Galindo Ramos.** C.C. No. 15.301.191 Caucasia_ Antioquia quien funge como solicitante en este proceso de restitución de tierras.

4.1.8) _Identificación general del predio objeto de la solicitud. Predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucasia

5.) _ ACTUACIÓN PROCESAL

5.1)_De la Admisión de la solicitud. La solicitud que conforma la demanda en el presente proceso fue admitida y se decretaron las órdenes señaladas en el artículo 86 y 87 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

5.2) _ De la Notificación. Por secretaría, se elaboró el aviso para publicitar el proceso en los términos del artículo 86 literal E de la ley 1448 de 2011. La Unidad de restitución de tierras (UAEGRTD), allegó las publicaciones en el periódico El Tiempo. Se realizó la correspondiente publicación del Edicto.

5.3)_Periodo probatorio. Este Juzgado Abrió a Pruebas el presente proceso de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente. Que contiene una (1) solicitud correspondiente a igual número de predio o parcela. Ésta judicatura advierte de las presunciones Legales de los literales a y b. Numeral 2 Artículo 77 Ley 1448 de 2011 de las que se hará mención a continuación:

5.3.1)_ Del acervo probatorio recaudado. Se ordenó fijar fecha y hora para la práctica de diligencia de interrogatorio al señor **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**, solicitante de restitución del predio la Esperanza. Procedió el Despacho a estudiar las declaraciones hechas por el solicitante en la diligencia en mención.

: “(...) vivo en Nechí, fui desplazado en el 2010, soy bachiller, casado, tengo 3 hijos, vivo del rebusque, sufrí un glaucoma, estoy sobreviviendo de la parcelita.

El señor Edurblo Gertrudis de Hoyos, tenía la parcela, dos parcelas en una, él no tenía la capacidad para cultivar arroz, entonces me dijo que me vendía una parte de la parcela para él ayudarse; le di la plata por ese pedazo de tierra, la negociación con el señor Edurblo la hice hace más de 20 años.

He explotado la tierra en pasto para ganadería, en cría de gallina, cerdo, tengo ganado Cebú. Me considero dueño de la parcela.

Yo en la parcela tenía un sobrino, y trabajaba la tierra con mi sobrino, pero cuando tenía que hacer cosas grandes, buscaba gente para trabajar, a veces contrataba hasta el señor Edurblo.

Yo abandoné la parcela por desplazamiento, en esa época había un conflicto armado entre dos grupos, Águilas Negras y los Paisas en una hacienda que colinda con la parcela, se llama hacienda San Lorenzo; el dueño tuvo que desocuparla, ellos se apoderaron de ella, habían balaceras, mi parcela quedaba a unos 500 metros, pasaban los proyectiles, muchos de ellos acampaban ahí. Mi sobrino tenía cinco niños, muchos de ellos nos dijeron que no nos estaban echando pero que si era bueno que desocupáramos porque a toda hora había balacera.

Actualmente estoy explotando la parcela, yo iba de vez en cuando y ahí fue cuando me di cuenta que se me habían llevado los animales. En ese momento mi compañera se había ido por lo que estaba ocurriendo a otra parcela donde su mamá.

Me registré en la Personería Municipal como desplazado. Actualmente vivo en una casa de mi suegro en Nechí. Los vecinos me conocen como señor y dueño de la parcela.

Esa parcela la encontré con monte, esa tierra la mecanicé, hice potrero, cercado, tengo un corral, coco, algarrobo, mango, limón.

Quienes iban por allá era el ejército, pero un día hubo algo que me llamó tanto la atención, para ir a mi parcela había un grupo paramilitar y más adelante, a 300 metros el ejército, pasaba uno por las dos partes.

Tengo mi problema de la vista, y en cuanto a mis medicamentos es un problema, en tres meses me han entregado a penas una parte de lo que me debo tomar en un mes. Las gotas son para que no se me suba la presión, si se me sube la presión puedo quedar completamente ciego (...).”

Del contexto anterior se puede inferir la posibilidad de aplicar las presunciones del Numeral 2, Literales a y b artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Presunciones legales en relación con ciertos contratos).

La sentencia C_ 388 de 2000, la Sala Plena de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló la definición de presunción legal en los siguientes términos.

“3. Las presunciones legales (Presunciones iuris tantum) no son otra cosa que hechos o situaciones que, en virtud de la ley, deben suponerse como ciertas siempre que se demuestren determinadas circunstancias previas o hechos antecedentes. En efecto, al establecer una presunción, el legislador se limita a reconocer la existencia de relaciones lógicamente posibles, comúnmente aceptadas y de usual ocurrencia, entre hechos o situaciones jurídicamente relevantes, con el fin de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos. Ahora

bien, a diferencia de las llamadas presunciones de derecho (*iuris et de iure* o auténticas ficciones jurídicas), las presunciones legales admiten prueba en contrario”.

La presunción exime, entonces, a quien la alega, de la actividad probatoria. Basta con caer en el supuesto del hecho indicador establecido por la norma para que opere la presunción. Así, lo que se deduce a partir del hecho indicador del hecho presumido no necesita ser probado. Se puede, sin embargo, desvirtuar el hecho indicador y se admite, por tanto, la actividad orientada a destruir el hecho a partir del cual se configura la presunción, cuando quiera que se trate de una presunción legal.

Justicia transicional. No desconoce la judicatura que la (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) responde a un modelo de justicia transicional plasmado en el artículo 8 de la Ley 1448 de 2011.

La víctima en su relato indica que: Los paramilitares que operaban en la zona, acostumbraban a llevarse animales, entraban a la finca y simplemente se llevaban lo que necesitaban, principalmente las vacas, marranos, mulas y que cada mes tenía que dar la Vacuna, que era la suma de dos millones de pesos. Inicialmente, le exigían solo un millón de pesos, el cual pagó en tres ocasiones y posteriormente se los aumentaron a 2 millones.

Que debido al incremento del valor de la Vacuna, “me tocó solicitar un préstamo al Banco Agrario. De ese préstamo alcanzó a pagar la suma de \$1.500.000. Sin embargo, según quienes le exigían el dinero, quedaba adeudando una fuerte suma de dinero, razón por la cual, al regresar al predio por el dinero restante y no encontrar al solicitante, arremetieron en contra de tres (3) de sus hijos, que se encontraban desayunando, quitándoles la vida. Las personas fallecidas respondían a los nombres de Jorge Eliecer Galindo Zabaleta, Aníbal Antonio Galindo Zabaleta y Yudis del Rosario Galindo Zabaleta.

A raíz de lo ocurrido y de las posteriores amenazas que recibió para que abandonara el predio, decidió salir de la finca con su familia, lo que le causó una gran tristeza, teniendo que soportar además al año siguiente, el fallecimiento de otra de sus hijas Ludís del Rosario Galindo Zabaleta.

No puede negarse que lo sucedido al reclamante sea un desplazamiento fundado en el miedo, forjado por grupos armados descontrolados, Las Águilas Negras y Los Paisas, sin ningún recato de autoridad visible, que llegara a cumplir los mandatos legales y constitucionales de salvaguardar la vida de los asociados. No se puede olvidar que al tenor constitucional la fuerza pública es garante de los derechos constitucionales fundamentales de todos los colombianos. Más aun de campesinos que lo único que tiene de patrimonio es la tierra de cual lo desplazaron, a través de las amenazas que traen como consecuencia el miedo y pérdida la tierra, el dolor y sufrimiento de haberlo perdido todo.

Para el caso específico de la veredas del corregimiento de Colorado, Los Paisas y Los Águilas Negras, son continuamente referenciados como responsables de masacres y despojos; se han registrado diversos hechos victimizantes sobre parceleros del municipio de Caucasia; como se muestra en uno de los ejercicios

de la línea de tiempo desarrollada por el área social de la URT-Territorial Córdoba", como se cita a continuación:

"Me desplace de allí en el mes de marzo de 2004 porque un día cualquiera llegó alias el "Mocho" –ya difunto–, y me dijo que el patrón había mandado a decir que necesitaba ese pedazo, me entregó \$9.400.000 y a la muchacha que trabajaba conmigo le dio 600.000 pesos, me dijo que tenía tres días para desocupar y que con esa plata que pagara todo, que dejara ese terreno a paz y salvo, de allí me fui para la casa que me dejó mi mamá la cual también tuve que abandonar por causa de la violencia. Alias el "Mocho" trabajaba con alias Cuco Vanoy, paramilitar que mandaba en la zona"

Del relato transcrito anteriormente se puede decir sin lugar a equívocos que hubo un desborde de la arbitrariedad consentida por las autoridades de turno, dejaron que las víctimas que hoy reclaman en su oportunidad quedaran solas sin el mínimo asomo de autoridad del Estado donde acudir, porque ellas solo existían para cobrar el sueldo, no para hacer cumplir el inciso 2 artículo 2 de la carta de 1991, que a letra reza:

"Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (El resaltado fuera del texto original).

En consecuencia de lo anterior, y en concordancia con las pruebas aportadas a esta solicitud de restitución, a saber entre otras la declaración del reclamante, pruebas coincidentes, contundentes y que nos llevan hacia el único sendero posible transitado por las víctimas que no es otro que tener como válidas sus afirmaciones que le dan vía jurídica a las llamadas presunciones legales, todo lo manifestado por la víctima hace relación con la verdad procesal y real de todo lo sucedido que no es más que el sendero ilegal del despojo de tierras en el Municipio de Caucasia_ Departamento de Antioquia, en un contexto de violencia perpetrado por los miembros grupos armados al margen de la ley, herederos de los paramilitares, Las Águilas Negras y Los Paisas , ordenadores del planeado y sistematizado proceso de despojo de los parceleros que también habían realizado sus antecesores paramilitares en muchas zonas del país , lo que obligó que humildes campesinos pasaran de poseedores, ocupantes o propietarios de parcelas a desplazados , lo cual no solo ataca los bienes de los mismos sino su dignidad humana y su mínimo vital.

5.4) _ FASE DE DECISIÓN. (FALLO).

El Juzgado, una vez analizado el expediente en la forma que se dejó mencionado, entrará a resolver de fondo sobre las pretensiones originales.

En los antecedentes del caso, se manifiesta que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas_ Dirección Territorial Córdoba- Sede Caucasia, cumpliendo con el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, presentó demanda de restitución sobre el predio que debidamente relaciona, en favor de la persona que, igualmente, identifica con sus nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía.

Luego de transcribir las pretensiones principales, procede a hacer una recapitulación de las generalidades de la Coexistencia de las guerrillas y los primeros grupos paramilitares en el Bajo Cauca, Consolidación del Bloque Mineros y del Bloque Central Bolívar en el Bajo Cauca, Desmovilización paramilitar, surgimiento de bandas criminales y reconfiguración territorial en el Municipio de Caucasia, entre otras.

Realiza un relato pormenorizado del inicio del despojo de las tierras adjudicadas y todo el marco de violencia vivido en la zona del Bajo Cauca, que influyó no solo en el desplazamiento forzado de los campesinos, sino de la usurpación de sus predios.

Presenta un análisis jurisprudencial acerca de la situación de los desplazados y su protección, llegando a la conclusión de que el desplazamiento forzado es una situación fáctica y no una calidad jurídica que pueda operar como un título de atribución. También, indica las implicaciones de la Ley 1448 de 2011, respecto de la restitución de tierras y el derecho que tienen los desplazados, no solo de recuperar jurídicamente sus tierras, sino del retorno a las mismas.

En el sentido jurisprudencial se adentra en el tema de los derechos de las víctimas, analizando el Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación, para detenerse en el examen del derecho fundamental a la restitución.

Respecto de la solicitud presentada por el señor **Pedro Pablo Galindo Ramos**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, en nombre propio en relación con el predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M², objeto de decisión, con el material probatorio allegado al expediente, se logró probar que el solicitante poseyó el predio objeto de debate de manera pública, pacífica e ininterrumpida.

De todo lo expuesto, se concluye que se encuentra debidamente acreditada la calidad de víctima del solicitante en mención **Pedro Pablo Galindo Ramos**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, en nombre propio en relación con el predio denominado **La Esperanza** ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M².

Cuadro C_3

Calidad Jurídica del Solicitante	Nombre del predio	CTLMI. No.	ÁREA SOLICITADA	ÁREA CATASTRAL	CÉDULA CATASTRAL	ÁREA SUPERFICIA GEORREFERENCIADA
Propietario	La Esperanza	015-13909 ORIP_ Montería.	45 Hectáreas.		051542004000002000 1000000000	35Hectareas 6.750 M ²

5.4.1)_ Identificación general del predio objeto de la solicitud. Se trata del predio denominado **La Esperanza** ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de

Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caucasia.

5.4.2)_ Del acervo probatorio recaudado. Se ordenó fijar fecha y hora para la práctica de la diligencia de interrogatorio al señor **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, solicitante de restitución del predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caucasia.

Hubo una intimidación global y un miedo generalizado en esos sectores de la zona rural del Municipio de Caucasia, los cuales no eran otros que personas pertenecientes a grupos armados ilegales llamados bandas criminales y grupos paramilitares que se convirtieron en la palabra que mandaba, ordenaba, hacía y deshacía sin que las autoridades legítimamente constituidas pudieran siquiera intentar hacer cumplir los mandatos constitucionales del inciso 2 artículo 2 superior.

Razón por la cual es de recibo acceder a las pretensiones formuladas a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas _UAEGRTD_ Dirección Territorial Córdoba.

La normatividad legal de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctima Y Restitución de Tierras) descalifica, reprocha y le señala sus consecuencias jurídicas, en la restitución de tierras a la presión y al mandato de obligatoriedad ejercida sobre la víctima con la finalidad de doblegar la voluntad en su condición de propietario de un inmueble de manera distinta con la legítima protección del Estado no hubiesen abandonado el del predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucasia., lo anterior trae como consecuencia la ausencia de consentimiento en los contratos y negocios realizados y genera la Inexistencia del acto o negocio de que trate y la nulidad absoluta de todos los actos a negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o una parte del bien.

5.5) _ ASPECTOS PRELIMINARES DEL PROCESO

5.5.1)_ Nulidades. No se advierte ningún vicio que pueda invalidar lo actuado dentro del presente trámite. Es de recordar que la Ley 1448 de 2011 da especiales facultades a los operadores judiciales, respecto de la práctica de pruebas cuando señala lo siguiente: **“Tan pronto el Juez o Magistrado llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo sin necesidad de decretar o practicar las pruebas solicitadas.** “(El resaltado fuera del texto original. Parte final Inciso 1 Artículo 89 Ibídem).

5.5.2)_ Presupuestos procesales. No observándose ningún reparo en cuanto a los presupuestos procesales, ni a la validez del proceso, no hace falta pronunciamiento particularizado al respecto; luego se adentra este Despacho a ocuparse de fondo en la resolución del asunto puesto a su conocimiento.

5.5.3)_ Problema jurídico. El problema jurídico que surge es determinar si es aplicable la situación jurídica planteada en las presunciones legales de los Literales a. b. del numeral 2 del artículo 77 Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Y por ende declarar las consecuencias que la ley establece en el caso concreto y teniendo en cuenta que se presentó oposición.

Para abordar la solución del problema jurídico propuesto, el Juzgado, estudiará inicialmente el contexto normativo de aplicación a este asunto, partiendo de dicho ordenamiento y de sus principios rectores, para proceder, posteriormente, al de los supuestos de hecho de las presunciones y la valoración probatoria en cada caso.

6.) _ CONSIDERACIONES

6.1)_ Aspectos generales. Se puede decir que existió una vulneración sistemática coordinada y masiva de los derechos fundamentales de las personas y, especialmente, de los más vulnerables que durante varios años, con mayor o menor intensidad, ha padecido la sociedad colombiana y se radicó en el sector rural del Municipio de Caucasia _Departamento de Antioquia.

La Judicatura a través del tribunal constitucional en cumplimiento del enunciado inicial artículo 241 de la Carta de 1991, que a letra reza:

“A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:”

Ese tribunal en ejercicio de su condición de garante de los principios y normas consagradas en la Constitución Política ha realizado una inherente labor en la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, entendiendo por tales a aquellas personas o grupos poblacionales que por sus condiciones sociales, culturales o económicas, o por sus características, tales como la edad, sexo, nivel educativo o estado civil, son susceptibles de sufrir maltratos contra sus derechos fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

Todo lo anterior dentro de un marco de igualdad señalado en la constitución de 1991, artículo 13. Que reza:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". (El resaltado fuera del texto original).

Se consideran como población vulnerable a los desplazados que son aquellos que se han visto forzados a migrar dentro del territorio nacional, porque varios de sus derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, con ocasión del conflicto armado interno que lamentablemente a la fecha junio de 2017, no termina, o por violaciones generalizadas de derechos humanos o cualesquiera otra lesiva del orden público.

La Corte Constitucional realizó la siguiente declaración formal de inconstitucionalidad (Sentencia T_025 de 2004).

"Varios son los elementos que confinan la existencia de un estado de cosas Inconstitucional respecto de la situación de la población internamente desplazada. En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por el mismo legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples derechos. En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, es el elevado volumen de acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener las distintas ayudas y el incremento de las mismas. En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción confirman ese estado de cosas inconstitucional y señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos. En cuarto lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única entidad. En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en factores estructurales enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema frente a la capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente a él. En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas." (Sentencia T_025 de 2004).

6.2)_ El Derecho de acceso a la Justicia y a la Reparación en la Constitución. En el orden constitucional colombiano, el artículo 229 superior, reconoce expresamente el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia a partir de esta fundamental decisión constituyente, se establece entonces un estrecho vínculo entre el derecho a la reparación y el derecho consagrado en la citada disposición.

En diversas ocasiones la Corte ha destacado que hace parte del derecho a la administración de justicia, el mandato dirigido a las autoridades judiciales de adoptar una decisión que precise el alcance de los derechos y deberes de las partes. Así por ejemplo, en la sentencia T_004 de 1995 se indicó que el núcleo esencial de la garantía establecida en el artículo 229 reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión. A su vez, en la sentencia T_134 de 2004, esa Corporación estableció que los elementos que cualifican el acceso a la administración de justicia impiden que la garantía de su acceso se vea limitada a una perspectiva formal y en contrario, obligan a que las controversias sometidas al estudio

de la jurisdicción obtengan una decisión de fondo que otorgue certidumbre sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos objeto de litigio. En la sentencia T_517 de 2006, la Corte destacó que el derecho a la reparación constituía un fundamento cualificador del derecho de acceder a la administración de justicia.

En igual sentido la sentencia C_454 de 2006, que en uno de sus apartes reza:

“Con fundamento en el artículo 93 constitucional, que establece que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Corte ha examinado la evolución que en el derecho internacional, ha tenido la protección de los derechos de las víctimas, particularmente el derecho a un recurso judicial efectivo, como elemento fundamental de esa protección. Los más relevantes instrumentos internacionales consagran explícitamente este derecho (...).

Así, ha destacado la jurisprudencia que tanto la Declaración Americana de Derechos del Hombre (...) como la Declaración Universal de Derechos Humanos (...), marcan una tendencia en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus derechos, a través de la cual no sólo obtengan reparación por el daño sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia (...)

6.3) _ El Derecho a la Justicia y la Reparación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el derecho internacional de los derechos humanos se establece como uno de los derechos de las personas, el contar con la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo para enfrentar las violaciones de las garantías reconocidas en los tratados internacionales, en la Constitución y la ley.

El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley; el numeral 2 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé como obligación de los Estados la adopción de las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter; el artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial fija la obligación de los Estados de asegurar a todas las personas protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes contra todo acto de discriminación racial que viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación; y el numeral 1 del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone : “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

6.4) _ El derecho de las Víctimas a la reparación integral. El derecho a la reparación incluye el derecho de las víctimas a ser restituidas. En la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas se reconocen los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. En tales principios se establece que una de las formas de reparación plena y efectiva consiste en la restitución. Ella, según el numeral 19 de tales principios, implica que el Estado siempre que sea posible, ha de ubicar a la víctima en la situación anterior a la violación de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario.

Adicionalmente se establece que la restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.

“Antes de la referida Resolución, en los denominados Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se encontraban enunciados algunos que resultaban ciertamente relevantes para la delimitación del derecho a la restitución. Así, el Principio 28 indica que las autoridades competentes tienen la obligación primaria de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. A su vez el Principio 29 dispone que las autoridades competentes tengan la obligación de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Adicionalmente se prevé, en el evento de que la recuperación del bien no resulte posible, que las autoridades competentes concedan a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les presten asistencia para que la obtengan.

Los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas prevén algunas pautas relevantes en materia de restitución de tierras. Así el numeral 2.1 dispone que los desplazados sean titulares del derecho a que les sean restituidos las viviendas, las tierras y el patrimonio del que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a ser indemnizados.

Cuando la restitución sea considerada de hecho imposible. El numeral 2.2 prevé, por su parte, que los Estados darán prioridad al derecho de restitución como medio preferente de reparación y como elemento fundamental de la justicia reformativa. A su vez se precisa, en ese mismo numeral, que el derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo siendo independiente de que se haga efectivo el regreso de las personas titulares de tal derecho. Por su parte, el documento referido advierte que los Estados deben garantizar que los procedimientos, instituciones, mecanismos y marcos jurídicos relativos a la restitución sean compatibles con las diferentes disposiciones del derecho internacional (numeral 11.1). Igualmente, en materia de accesibilidad a los procedimientos orientados a solicitar la restitución, se establece que toda persona que hubiere sido privada arbitraria o ilegalmente de su vivienda, sus tierras o su patrimonio debe contar con la posibilidad de solicitar su restitución o la indemnización correspondiente ante un órgano independiente e imparcial (numeral 13.1). Adicionalmente y en relación con la protección de los denominados segundos ocupantes, se indica la obligación de contar con recursos suficientes para canalizar sus reclamaciones y obtener la reparación que corresponda como consecuencia del desalojo (numeral 17.1). En esa misma dirección se precisa que cuando los ocupantes secundarios hubieren vendido las viviendas, las tierras o el patrimonio a terceros que las hayan adquirido de buena fe, los Estados podrán considerar la posibilidad de establecer mecanismos para indemnizar a los compradores que hayan resultado perjudicados. (Numeral 17.4).

Esta conceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de nuestra Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (a) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (b) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 núm. 6 y 7 CP); (c) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2º CP); (d) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art. 1º CP); (e) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (f) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de

decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias”.

La Corte Constitucional a este respecto ha establecido el derecho a la restitución de las personas que se han visto afectadas por el desplazamiento forzado como un derecho fundamental; así, en la sentencia T_821 de 2007, afirmó:

“Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del Estado (...).

Ciertamente, si el derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que afirmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental; como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral. En este sentido es necesario recordar el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 (...) y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas (...) (los llamados principios Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29 (...) y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de constitucionalidad en sentido lato en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado (...) (C. P. Art. 93.2)”.

La sentencia T_159 de 2011, se refirió nuevamente al derecho a la restitución de las personas desplazadas afirmando su carácter fundamental. Dijo entonces:

"En consecuencia, dentro de las medidas dispuestas para la protección a las víctimas de desplazamiento se contempla el derecho a la restitución y por ello en el decreto 250 de 2005 en desarrollo de los principios orientadores para la atención integral a la población desplazada se estipula el: "Enfoque repositivo: Se entiende como la reposición equitativa de las pérdidas o daños materiales acaecidos por el desplazamiento, con el fin de que las personas y los hogares puedan volver a disfrutar de la situación en que se encontraban antes del mismo. Las medidas de restitución contribuyen al proceso de reconstrucción y estabilización de los hogares afectados por el desplazamiento". (Subrayado por fuera del texto)

Esta restitución debe extenderse a las garantías mínimas de restablecer lo perdido y volver las cosas al estado en que se encontraban previas a la vulneración de los derechos afectados, lo que comprende entre otros: "El derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma..." (...). Este derecho de restitución a los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia retributiva. En este sentido, se le pueden atribuir algunas características: (i) ser un mecanismo de reparación y (ii) un derecho en sí mismo con independencia de que se efectuó el restablecimiento.

En este contexto el derecho a la restitución es un componente esencial del Estado Social del Derecho por lo que el tratamiento a las víctimas del delito de desplazamiento forzado debe buscar el restablecimiento de sus bienes patrimoniales lo cual debe

enmarcarse dentro de lo previsto en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas.

De igual manera debe entenderse que dentro de la noción de restitución sobre los derechos al goce, uso y explotación de la tierra ya implícito la reparación a los daños causados, en la medida que el Estado garantice el efectivo disfrute de los derechos vulnerados, así por ejemplo el derecho al retomo, el derecho al trabajo el derecho a la libertad de circulación y el derecho a la libre elección de profesión u oficio.

Así las cosas, las víctimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a obtener la restitución y explotación de la tierra de la cual fueron privados y expulsados por situaciones de violencia que no estaban obligados a 'Soportar y que desencadenó una vulneración masiva de sus derechos fundamentales'.

6.5.)_ El Derecho a la Restitución de la Tierras de las personas en situación de Desplazamiento Forzado.

“Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del Estado. Se puede decir que el Estado ha demostrado una negligencia rampante en el diseño de una política real de atención a los desplazados tenga en cuenta su condición de víctimas del conflicto armado, la cual les confiere derechos específicos, como lo son los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para el caso específico de las personas víctimas del desplazamiento forzado, estos derechos se manifiestan, igualmente, en la protección de los bienes que han dejado abandonados, en particular de sus tierras – componente de protección que no ha sido resaltado con suficiente fuerza por las entidades que conforman el SNAIPD”. (Auto 218 de 2006).

En idéntico sentido en la Sentencia T_1037 de 2006, dijo el Tribunal constitucional de Colombia lo siguiente:

“Con todo, esta Corporación considera que el hecho de que el señor Quintero Durán se haya visto obligado a abandonar los inmuebles de su propiedad, víctima de la violencia, le confiere el derecho a que los mismos sean amparados hasta tanto él se halle en condiciones de hacerse cargo, a fin de evitar actos que recaigan sobre estos”.

Antes de la Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). El derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, era un derecho fundamental, se afirma sin lugar a equívocos que derecho a la restitución del bien incluido, el bien inmueble como el caso que nos ocupa solo un (1) solicitante y reclamante en situación de desplazamiento ha sido despojada, es también un derecho fundamental. Se ha recalcado que el derecho a la restitución es uno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral. En este sentido es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para

el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas (los llamados principios Deng), (Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng). Entre ellos, los Principios 21, 28 y 29 y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado (C.P. art. 93.2).

Principio 28. – 1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de 2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración. Principio 29. – 1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos. 2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.

Los Principios del representante especial Sr. Francis Deng. Sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas en su numeral 2 establece:

“Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial. 2.2. Los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como medio preferente de reparación en los casos de desplazamiento y como elemento fundamental de la justicia restitutiva. El derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a quienes les asista ese derecho. 10.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse en una elección libre, informada e individual. Se debe proporcionar a los refugiados y desplazados información completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material y jurídica en sus países o lugares de origen. (...)

13. Accesibilidad de los procedimientos de reclamación de restitución. 13.1. Toda persona a quien se haya privado arbitraria o ilegalmente de su vivienda, sus tierras o su patrimonio debe tener la posibilidad de presentar una reclamación de restitución o de indemnización ante un órgano independiente e imparcial, que debe pronunciarse acerca de la reclamación y notificar su resolución al reclamante. Los Estados no deben establecer condiciones previas para la presentación de una reclamación de restitución. 13.2. Los Estados deben velar por que todos los aspectos de los procedimientos de reclamación de restitución, incluidos los trámites de apelación, sean justos, oportunos, accesibles y gratuitos, y que en ellos se tengan en cuenta las cuestiones de edad y de género. Los Estados deben adoptar medidas positivas para garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de plena igualdad en estos procedimientos. 13.3. Los Estados

deben garantizar que los niños separados o no acompañados puedan participar en los procedimientos de reclamación de restitución y estén plenamente representados en él, así como que cualquier decisión relativa a las reclamaciones de restitución presentadas por niños separados no acompañados se adopte de conformidad con el principio general del "interés superior del niño". 13.4. Los Estados deben garantizar que todos los refugiados y desplazados, cualquiera sea el lugar en que residan durante el período de desplazamiento, puedan acceder a los procedimientos de reclamación de la restitución ya sea en los países de origen, en los países de asilo o en los países a los que hayan huido. Los Estados deben garantizar que todas las personas afectadas tengan conocimiento de los procedimientos de reclamación de la restitución y que la información sobre dichos procedimientos se ponga fácilmente a su disposición, ya sea en los países de origen, en los países de asilo o en los países a los que hayan huido. 13.5. Los Estados deben procurar establecer centros y oficinas de tramitación de las reclamaciones de restitución en todas las zonas afectadas en que residen personas con derecho a presentar esas reclamaciones. Para facilitar al máximo el acceso a los procedimientos de reclamación, las personas afectadas deben tener la posibilidad de presentar sus reclamaciones por correo, por medio de un representante legal o en persona. Los Estados también deben considerar la posibilidad de establecer unidades móviles para garantizar que todos los reclamantes potenciales puedan acceder a los procedimientos de reclamación. 13.6. Los Estados deben velar por que los usuarios de las viviendas, las tierras o el patrimonio, incluidos los arrendatarios, tengan derecho a participar en los procedimientos de reclamación de la restitución, incluso mediante la presentación de reclamaciones conjuntas. 13.7. Los Estados deben elaborar formularios de reclamación de la restitución que sean sencillos y fáciles de entender y utilizar, y que estén redactados en el idioma o los idiomas principales de los grupos afectados. Se debe prestar a las personas asistencia adecuada para rellenar y presentar todos los formularios de reclamación necesarios, teniendo en cuenta la edad y el género de los reclamantes. 13.8. Cuando no sea posible simplificar suficientemente los formularios de reclamación debido a la complejidad inherente a esos procedimientos, los Estados deben contratar a personas cualificadas para que se entrevisten con los reclamantes potenciales y, respetando el principio de confidencial y teniendo en cuenta su edad y su género, recaben la información necesaria para completar los formularios de reclamación en su nombre. 13.9. Los Estados deben establecer plazos precisos para la presentación de reclamaciones de restitución. Esos plazos, que deben divulgarse ampliamente y ser suficientemente extensos para que todos los afectados puedan presentar sus reclamaciones, han de establecerse teniendo en cuenta el número de reclamantes potenciales, las posibles dificultades para obtener y recopilar la información, el alcance del desplazamiento, la accesibilidad de los procedimientos para grupos potencialmente desfavorecidos e individuos vulnerables, y la situación política en el país o la región de origen. 13.10. Los Estados deben velar por que se proporcione a las personas que lo necesiten, incluidos los analfabetos y los discapacitados, una asistencia especial para garantizar que no se les niegue el acceso a los procedimientos de reclamación de restitución. 13.11. Los Estados deben garantizar la prestación de una asistencia jurídica adecuada y, de ser posible, gratuita a quienes deseen presentar una reclamación de restitución. Esta asistencia jurídica, cuya prestación podrá correr a cargo de instituciones gubernamentales o no gubernamentales (nacionales o internacionales), deberá estar exenta de discriminación y satisfacer normas adecuadas de calidad, equidad e imparcialidad, a fin de que los procedimientos de reclamación no se vean menoscabados. 13.12. Los Estados deben velar por que nadie sea procesado o castigado por presentar una reclamación de restitución. 15. Registros y documentación de las viviendas, las tierras y el patrimonio. 15.1. Los Estados deben establecer o restablecer sistemas catastrales nacionales con fines múltiples u otros sistemas apropiados para el registro de los derechos sobre las viviendas, las tierras y el patrimonio como componente integrante de cualquier programa de restitución, respetando los derechos de los refugiados y desplazados. 15.2. Los Estados deben velar por que toda declaración judicial, cuasi judicial, administrativa o consuetudinaria relativa a la propiedad legítima de las viviendas, las tierras o el patrimonio, o a los derechos correspondientes, vaya acompañada de medidas encaminadas a hacer efectivos el registro o la delimitación de dichos bienes, como requisito para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia. Estas medidas se ajustarán a las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, del derecho de los refugiados y del derecho humanitario, y de las normas conexas, incluido el derecho a la protección contra la discriminación. 15.3. Los Estados deben garantizar, cuando proceda, que en los sistemas de registro se inscriban o se reconozcan los derechos de propiedad de las comunidades tradicionales e indígenas sobre tierras colectivas. 15.4. Los Estados y las demás autoridades o instituciones responsables

deben velar por que los sistemas de registro existentes no se destruyan durante los conflictos o los períodos posteriores a ellos. Entre las medidas para prevenir la destrucción de los registros de las viviendas, las tierras y el patrimonio cabría incluir su protección in situ o, si fuera necesario, su traslado temporal a un lugar seguro o el establecimiento de un dispositivo de custodia adecuado. En caso de traslado, los registros se deben restituir a su lugar de origen lo antes posible tras el fin de las hostilidades. Los Estados y las demás autoridades responsables también pueden considerar la posibilidad de establecer procedimientos para copiar los registros (por ejemplo, en formato digital), trasladar los originales a un lugar seguro y acreditar la autenticidad de las copias. 15.5. Los Estados y las demás autoridades o instituciones responsables deben facilitar, a instancia de un reclamante o de su representante legal, copias de cualquier prueba documental que obre en su poder y que sea necesaria para presentar o fundamentar una reclamación de restitución. Dichas pruebas documentales deben proporcionarse gratuitamente o por una tasa módica. 15.6. Los Estados y las demás autoridades o instituciones responsables que lleven a cabo el registro de refugiados o desplazados deben esforzarse por recopilar la información pertinente para facilitar el proceso de restitución, por ejemplo incluyendo en el formulario de registro preguntas relativas a la ubicación y las características de las viviendas, las tierras, el patrimonio o el lugar de residencia habitual de que se vio privado cada refugiado o desplazado. Dicha información debe solicitarse siempre que se recaben datos de los refugiados y desplazados, incluso durante la huida. 15.7. En casos de desplazamiento masivo en que existan pocas pruebas documentales de la titularidad o de los derechos de propiedad, los Estados pueden adoptar la presunción de pleno derecho de que las personas que hayan huido de sus hogares durante un determinado período marcado por la violencia o el desastre lo hicieron por motivos relacionados con la violencia o el desastre y que, por tanto, tienen derecho a la restitución de sus viviendas, sus tierras y su patrimonio. En dichos casos, las propias autoridades administrativas y judiciales pueden encargarse de determinar los hechos relacionados con las reclamaciones de restitución que no vayan acompañadas de la documentación necesaria. 15.8. Los Estados no considerarán válida ninguna transacción de viviendas, tierras o patrimonio, incluida cualquier transferencia que se haya efectuado bajo presión o bajo cualquier otro tipo de coacción o fuerza directa o indirecta, o en la que se hayan respetado las normas internacionales de derechos humanos”.

Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng.

Naciones Unidas. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 57º período de sesiones E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005. El Proyecto tiene como objetivo apoyar la protección de los bienes patrimoniales de la población rural en situación de desplazamiento o en riesgo de ser desplazada, mediante el aseguramiento jurídico, social e institucional de los bienes y el fortalecimiento del tejido social comunitario, con el fin de mitigar los efectos del desplazamiento, disminuir la vulnerabilidad de la población desplazada y facilitar su estabilización socioeconómica.

Cuando se trata del despojo de la tierra de agricultores de escasos recursos que sobreviven gracias al cultivo de la tierra o a la cría de animales, la violación del derecho a la propiedad o a la posesión se traduce en una violación del derecho fundamental a la subsistencia digna (al mínimo vital) y al trabajo. Adicionalmente, a la hora de afrontar tales violaciones, resultan aplicables los principios Rectores de los Desplazamientos Internos, (los llamados principios Deng), y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, principios que hacen parte del Bloque de constitucionalidad en sentido lato”.

En el mismo sentido se expresa la legislación nacional. En efecto, la Ley 387 de 1997, en su artículo 19 señala que las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la Población Desplazada.

Justicia transicional a la luz de la Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). El concepto de justicia transicional contenido en la ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). En su artículo 8, ya ha sido estudiado por la Corte Constitucional en los pronunciamientos, entre ellos el dado en sentencia C_771 del 13 de octubre de 2011. M.P. Nilsón Pinilla Pinilla. Afirmó.

(...)De los anteriores conceptos y de la continua evolución de la noción de justicia transicional puede concluirse que el derecho comparado y la comunidad internacional la han entendido como una institución jurídica a través de la cual se pretende hilvanar e integrar ingentes esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales comunes, contexto en el cual se anuncia inscrita la Ley 1424 de 2010 desde su título, cuya validez analizará esta Corte en el punto 5.2 de la presente sentencia”.

La sentencia C_ 052112) la Corte Constitucional. P.M. Nilson Pinilla Pinilla, en relación con la justicia transicional señaló:

“Según lo ha planteado la jurisprudencia de esta Corte, puede entenderse por justicia transicional una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de excepción .frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes... Ahora bien, no obstante que el texto de este ley no contiene ninguna específica precisión en ese sentido, de la lectura de su extenso articulado puede observarse que se trata de un conjunto de disposiciones especiales, adicionales a las previamente contenidas en los principales , códigos y en otras leyes de carácter ordinario, relativas a los derechos de las víctimas de determinados hechos punibles y de otras situaciones consecuenciales, que en cuanto tales se superponen y se aplicarán en adición a lo previsto en tales normas ordinarias”.

La Sentencia C_253A/12 de la Corte Constitucional M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, uno de sus apartes indicó:

“Con ese telón de fondo, la iniciativa se inscribe dentro del conjunto de instrumentos normativos que se han expedido con el fin de hacer frente a la situación de conflicto armado y que pueden articularse conceptualmente en torno a la idea de un modelo de justicia transicional que responda a las peculiaridades de la situación del país, y que en la ley se define como "los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 149 la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograrla reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible”.

6.6)_ El Derecho a la Restitución. Conforme a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el derecho a la restitución encuentra apoyo en: (1) el interés constitucional de que las víctimas sean efectivamente reparadas: (2) y en la definición –prevista en el derecho

internacional así como en el ordenamiento interno– de acuerdo con la cual las medidas constitutivas de restitución se integran al objeto protegido por el derecho a la reparación.

6.7)_ La Acción de Restitución en la Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Para enfrentar ese fenómeno de violencia mencionada al inicio, es que la Ley 1448 de 2011.

“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en forma semejante a la Ley 1424 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley” y a la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”: surge como un mecanismo de justicia transicional previsto precisamente para enfrentar las consecuencias de este tipo de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto y consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones corrientes.

En la lectura simple de sus artículos 1, 8 y 9 se afirma sin lugar a equívocos que la llamada justicia transicional es visible y aplicable en toda su normatividad ya en disposiciones generales como las especiales.

La ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y restitución de Tierras) pretende reunir en un solo texto las múltiples normas garantistas a las víctimas tales como: de información, asesoría y apoyo; de comunicación; mecanismos para la audición y presentación de pruebas; medidas de transición, atención y reparación; de protección; de ayuda y asistencia humanitaria; de indemnización; de compensación; creación de archivos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, acciones en materia de memoria histórica; entre muchas otras; y, finalmente, un inventario de garantías de no repetición orientadas al desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas y de medidas de reparación colectiva y la determinación de los sujetos de dicha reparación.

En cuanto a la restitución de tierras, que es el aparte que hoy nos interesa, se presenta como una medida preferente de reparación cuyo propósito consiste en facilitar un procedimiento para que quienes perdieron injustamente sus tierras por causa del conflicto armado puedan recuperarlas.

De esta forma la restitución no sólo persigue la devolución de su propiedad, posesión u ocupación a las víctimas del despojo y abandono a la situación que ostentaban antes de la violación de sus derechos sino que va más allá: otorga la posibilidad de adquirir el título de propiedad del terreno poseído o explotado dentro del mismo proceso en virtud del principio de la “Reparación Transformadora” inmersa en la misma Ley.

El Capítulo III del Título IV de la ley 1448 en su artículo 73 hace una relación de los principios de restitución, así enlistados: preferencia, independencia, progresividad, estabilización, seguridad jurídica, prevención, participación y prevalencia constitucional, último principio que desarrolla de la siguiente manera: "Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial".

A partir del artículo 76 *Ibídem*, señala el procedimiento a seguir que se caracteriza por ser de índole mixta, es decir, tiene una etapa administrativa que se inicia con el registro de tierras presuntamente despojadas y abandonadas forzosamente por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para pasar luego a una etapa judicial en la cual, mediante un procedimiento simple y especializado los funcionarios judiciales definen la situación de los predios y ordenan, en lo pertinente, su restitución jurídica y material.

El procedimiento contempla varias figuras especiales tales como la inversión de la carga de la prueba (Artículo 78), las presunciones de despojo en relación con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas (Artículo 77), flexibilidad en el aporte de pruebas y su valoración, agilidad y brevedad en los términos; el valor de prueba fidedigna de los medios probatorios provenientes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Inciso final del artículo 89), todas ellas fundados en la aplicación rigurosa de los principios de "Favorabilidad", "Pro personae", "buena fe", "exoneración de carga de prueba", "decreto oficioso de pruebas". Etc. ante la evidente vulnerabilidad y la enorme exclusión social de las víctimas.

En desarrollo de tales principios, la misma ley prevé en la parte final del inciso 1 artículo 89 que: "**Tan pronto el Juez o Magistrado llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo sin necesidad de decretar o practicar las pruebas solicitadas**". (El resaltado fuera del texto original)

Sin duda alguna nos encontramos frente a un proceso de carácter especial alejado de la ritualidad de los procesos civiles de la justicia ordinaria que desarrolla un procedimiento breve y eventualmente sumario originado y cobijado por el entorno de una justicia transicional en medio de un conflicto armado que ha cobrado las vidas y los bienes de los más débiles dejando un recuadro de abandono de estos últimos y desplazamiento forzado de todo el entorno familiar, para adentrarse en la marginalidad de las poblaciones donde llegan huyendo de la situación de violencia de un conflicto armado vigente que en vez de terminar se mantiene sin que pueda verse a futuro la terminación del mismo.

Se puede agregar que semejante situación tiene como características la denominada "Inversión de la carga de la prueba" por la calidad de la parte solicitante (Artículo 78); las presunciones contenidas en el artículo 77 entre ellas las denominadas: "presunciones legales en relación con ciertos contratos" que exigen a quien las pretenda, probar el hecho base de las mismas.

La ley está presumiendo la ausencia de consentimiento o causa lícita que trae como consecuencia la inexistencia de ese acto o negocio y la nulidad absoluta de los actos o negocios posteriores. Estas presunciones podrán probarse en cualquiera de las etapas que comprende el desarrollo procesal: En la administrativa o en la judicial, pues en ellas se dan las oportunidades para que las partes presenten todos los medios probatorios que consideren útiles para la restitución o la oposición, según el caso.

6.8)_ Las Presunciones en el Ordenamiento Jurídico Colombiano. La doctrina jurídica especializada el término presunción proviene del verbo latino compuesto prae-sumere, que significa "tomar antes, resolver de antemano, anticipar, prever, presentir, conjeturar"³⁵, puesto que presumir equivale a tomar o dar por cierto un hecho, un derecho o una voluntad, con antelación a que estos hayan, sido probados³⁶. Al respecto, también, se ha sostenido que la palabra presumir tiene raíces en los vocablos "Prae" y 'mumere", para significar "prejuicio sin prueba", ya que quien presume admite o acepta que una cosa es cierta, sin que para ello medie probanza alguna.

El Código Civil colombiano artículo 66, afirma que: "Se dice presumir el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas", dando a entender que una presunción es la inferencia que da por cierta la existencia de un hecho desconocido, a partir de la constatación de hechos conocidos³⁷. Por eso, con fundamento en las reglas de la experiencia que indican el modo ordinario de acontecer las cosas, legislador o el juez toman, anticipadamente, como sabido la causa o el efecto de un hecho³⁸.

La jurisprudencia constitucional, acerca del tema, ha señalado que: "(...) las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se apoyan, ya no es preciso mostrar, valiéndose de otros medios de prueba, lo presumido por la ley. En virtud de la presunción legal, se tiene una prueba completa desde el punto de vista procesal y es esa exactamente la finalidad jurídica que cumplen las presunciones y sin la cual carecerían de sentido".

Se trata entonces de : "Un típico procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración de las instituciones procesales, con el fin de convertir en derecho lo que simplemente es una suposición fundada en hechos o circunstancias que generalmente ocurren, ante el riesgo de que la dificultad de la prueba pueda significar la pérdida de ese derecho afectando bienes jurídicos de importancia para la sociedad", se trata, además, de instituciones procesales que "respetando las reglas de la lógica y de la experiencia, reconocen la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comúnmente aceptadas, para elevadas, por razones de equidad, al nivel de presunciones"³⁹.

Las presunciones son de dos clases: las legales y las simples o judiciales, también llamadas presunciones de hombre. Dentro de las primeras se encuentran las

³⁵ Parra Quijano, Jairo. *Reflexiones sobre las Presunciones*. Revista del Instituto Colombiana de Derecho Procesal. Volumen No 8 (1989). ([http://www.icdp.co/revista/articulos/8/REFLEXIONES%20SOBRE%20LAS%20PRESUNCIONES-%20JAIRO PARRAQUIJANO.pdf](http://www.icdp.co/revista/articulos/8/REFLEXIONES%20SOBRE%20LAS%20PRESUNCIONES-%20JAIRO%20PARRAQUIJANO.pdf))

³⁶ González Velásquez, Julio. *Manual Práctico de la Prueba Civil*. librería Jurídica Ltda., Bogotá, 1951, p. 280.

³⁷ Corte Constitucional Sentencia C-062/08.

³⁸ Devis Echandia, Hemando. *Compendio de Derecho Procesal*. T. II. Pruebas Judiciales. 10 Ed. Medellín, Biblioteca Jurídica Dike. 1994, Págs. 537 y 538.

³⁹ Corte Constitucional, Sentencia C-780/07.

presunciones *luris tantum*, denominadas legales, erróneamente según algunos, las cuales son susceptibles de ser desvirtuadas mediante prueba en contrario. También, pueden ser *luris et de iure*, que son conocidas como presunciones de derecho y se caracterizan porque no es factible desvirtuarlas, pues simplemente no admiten prueba en contrario⁴⁰. Mientras que las presunciones de hombre o judiciales, son aquellas establecidas no por la ley, sino por el hombre quien en la vida práctica las aplica cuando es juez, para determinar el grado de credibilidad que le merece un medio probatorio⁴¹.

La Corte Constitucional ha señalado: "La presunción exime, entonces, a quien la alega, de la actividad probatoria. Basta con caer en el supuesto del hecho indicador establecido por la norma para que opere la presunción. Así, lo que se deduce a partir del hecho indicador del hecho presumido no necesita ser mostrado. Se puede, sin embargo, desvirtuar el hecho indicador y se admite, por tanto, la actividad orientada a destruir el hecho a partir del cual se configura la presunción, cuando quiera se trate de una presunción legal. Igualmente, ha expresado dicha Corporación que la finalidad primordial de esas instituciones procesales es corregir la desigualdad material que pueda llegar a existir entre las partes respecto del acceso a la prueba, y a proteger a la parte que se encuentre en situación de indefensión o de debilidad manifiesta, para lo cual el legislador releva a quien las alega en su favor de demostrar el hecho deducido, promoviendo, de esta forma, relaciones procesales más equitativas y garantizando bienes jurídicos particularmente importantes"⁴². Del mismo modo ha manifestado la Corte que (...) que las presunciones no son un juicio anticipado que desconozca la presunción de inocencia, "ya que se trata de un típico procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración de las instituciones procesales, con el fin de convertir en derecho lo que simplemente es una suposición fundada en hechos o circunstancias que generalmente ocurren, ante el riesgo de que la dificultad de la prueba pueda significar la pérdida de ese derecho afectando bienes jurídicos de importancia para la sociedad"⁴³. Con esa orientación conceptual, el alto tribunal constitucional ha considerado que las presunciones establecidas en la ley no vulneran el debido proceso, ya que el legislador en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, puede reconocer la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comúnmente aceptadas, para elevarlas, por razones de equidad, al nivel de presunciones, con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos, respetando las reglas de la lógica y de la experiencia⁴⁴.

6.9.)_ Las presunciones establecidas en la Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Al reconocer el estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de quienes, individual o colectivamente, han sufrido el despojo y abandono forzado, dentro del contexto del conflicto armado interno, como víctimas de graves violaciones de sus derechos fundamentales, consagró unos mecanismos probatorios entre ellos presunciones para lograr la igualdad procesal de la parte débil e indefensa, que ha sido privada, arbitrariamente, de su propiedad, posesión u ocupación, y/o se le impidió ejercer la administración, explotación y contacto

⁴⁰ Azula Camacho, Jaime, Manual de derecho Probatorio. Tomo VI. Pruebas Judiciales. Segunda edición. Editorial Temis. Bogotá, 2003, Pág. 333

⁴¹ Según lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 30 de junio de 1939, en estas presunciones "(...) es más insegura la deducción, porque depende de muchos factores de raciocinio: las leyes naturales o sociales constantes que, dada la continuidad o regularidad con se Producen le dan á la deducción en un caso particular la probabilidad de haber sucedido".

⁴² Corte Constitucional, Sentencia C-374/02

⁴³ Corte Constitucional, ídem

⁴⁴ Corte Constitucional, Sentencia C388/00

directo con los predios, que debió desatender en su desplazamiento ocasionado por la situación de violencia.

Entendió el legislador en su poder de configuración al tramitar la Ley 1448 de 2011, que no se desarrollaría un proceso entre iguales que si algo era cierto en el desarrollo del proceso de restitución de tierras era la desproporcionalidad abismal entre las partes quedando las víctimas nuevamente a merced de los opositores no solo en la etapa administrativa sino en el espacio temporal del proceso ante la Rama Judicial. Entonces ante esa situación el legislador miró a futuro la eventual realidad jurídica procesal recurrió a las presunciones que a nuestro modesto entender es una herramienta jurídica de características esenciales y nos atrevemos a decir sin timidez alguna que las presunciones encabezadas por la de derecho es el núcleo esencial del tema probatorio de la Ley de víctimas y restitución de tierras, donde se hace fuerte el solicitante de restitución y a través de las mismas se logra como mínimo equilibrar la situación jurídica procesal y colocar al solicitante de restitución en una posición procesal de ventajas probatorias ante los opositores.

El artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Fijó las presunciones de despojo, en relación con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. Presunciones que han sido concebidas, realmente, en favor de la víctima, quien es el sujeto procesal tutelar del derecho a solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente⁴⁵. A ese respecto, el precepto normativo citado estableció: a) Presunciones de derecho en relación con ciertos contratos (Numeral 1). b) _ Presunciones legales en relación con ciertos contratos (Numeral 2). Presunciones legales sobre ciertos actos administrativos. (Numeral 3). d)– Presunción del debido proceso en decisiones judiciales. (Numeral 4) e)_ Presunción de inexistencia de la posesión. (Numeral 5).

En relación a las presunciones, será suficiente encuadrarse en el supuesto del hecho indicador determinado por la norma, para activar la presunción. En el caso de las presunciones luris et de iure o presunciones de derecho, se cierra la posibilidad de desvirtuar el hecho indicador a partir del cual se configuran, puesto que sencillamente no admite prueba en contrario.

De esa forma, en las hipótesis del numeral 1 del artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras): En comentario, bastará acreditar que durante el período comprendido entre el primero (1) de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011, la persona que ha sufrido despojo y el abandono forzados, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus causahabientes, han celebrado negocios y contratos de compraventa o cualquier otro, mediante el cual se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución, con las personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados

⁴⁵ Corte Constitucional. Sentencia C715/12

que actúan por fuera de la ley cualquiera que sea su denominación, o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros, para que se presuma de derecho la ausencia de consentimiento, o causa ilícita, en tales actos jurídicos.

En estas condiciones, dado el notorio abandono y despojo forzados de miles de hectáreas de tierras a la población civil en Colombia, por parte de actores generadores de violencia extrema, la ley infiere de dichas circunstancias, ampliamente conocidas, que las víctimas realmente no expresaron su consentimiento, al celebrar negocios jurídicos con los perpetradores de las violaciones generalizadas de derechos humanos, o con quienes actuaron en complicidad con estos, sin que sea admisible prueba en contrario. La situación planteada, también hará predicar la ausencia de causa lícita en los contratos así celebrados, desprendiéndose, por tanto, las mismas consecuencias.

Las presunciones luris tantum, planteadas en los numerales 2, 3, 4 y 5, *Ibidem*, si se admite la actividad orientada a destruir el hecho a partir del cual se configuran las presunciones, relativas a la ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los negocios jurídicos, mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el numeral 1 *ibidem*; o la referentes a la presunción de nulidad de un acto administrativo que legalizó una situación jurídica contraria a los derechos de la víctima; o la concerniente a dar por cierto que los hechos de violencia le impidieron al despojado ejercer su derecho fundamental de defensa dentro del proceso de restitución, a través del cual se legalizó una situación contraria a su derecho; o la que niega la existencia de la posesión sobre el bien objeto de restitución, durante el periodo previsto en el artículo 75 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Y la sentencia que pone fin al proceso regulado en dicho texto legal.

Las presunciones concebidas en la Ley de víctimas, sean luris tantum o luris et de iure, deben producir el importante efecto jurídico de relevar de la carga de la prueba a los solicitantes de la restitución de tierras, que las alegan en su favor, partiendo de hechos conocidos que el legislador tomó de base para constituir las, tales como el abuso masivo y permanente de derechos humanos en el conflicto armado interno, para suponer o dar certeza, por razones de seguridad jurídica y justicia, a la existencia del despojo y abandono forzados de predios, cuya propiedad, posesión u ocupación legítimas, fueron truncadas por grupos armados organizados como aparato de poder de facto.

La Corte Suprema de Justicia, en su doctrina jurisprudencial siempre ha señalado que: "Aludir a presunciones contribuye (...) a agilizar ciertos procesos pues exime de la actividad probatoria en casos en los que tal actividad es superflua o demasiado difícil".⁴⁶

⁴⁶ Sala de Casación Civil. Providencia de 18 de Noviembre de 1949, G.J. Tomo XLIV, páginas 799 a 802

7.)_ EL CASO CONCRETO

7.1) _ Las presunciones de Despojo en Relación con Predios Inscritos en el Registro de Tierras Despojadas. Las Presunciones legales de los Literales a. b. Numeral 2 del artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). En relación con los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta las siguientes presunciones:

"2. Presunciones legales en relación con ciertos contratos. Salvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que en los siguientes negocios jurídicos hay ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de compraventa y demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos:

a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómenos de desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la época en que ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protección individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazado la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes.

b. Sobre inmuebles colindantes de aquellos en los que, con posterioridad o en forma concomitante a las amenazas, se cometieron los hechos de violencia o el despojo se hubiera producido un fenómeno de concentración de la propiedad de la tierra en una o más personas, directa o indirectamente; sobre inmuebles vecinos de aquellos donde se hubieran producido alteraciones significativas de los usos de la tierra como la sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o minería industrial, con posterioridad a la época en que ocurrieron las amenazas, los hechos de violencia o el despojo".

La aplicación eficaz de las presunciones legales transcritas, exige que se demuestre la existencia de los siguientes supuestos de hecho para generar tal inferencia: Hechos ocurridos así: (1)_ En el periodo previsto legalmente artículo 75 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Es decir a partir del primero (1) de enero de 1991. (2). El contexto de violencia. (3). La calidad de Víctima del solicitante. (4). Que exista un negocio jurídico, contrato de compraventa o "cualquier otro" entre la víctima. (Grupos de parientes y causahabientes).

No son aplicables las Presunciones de derecho en relación con ciertos contratos del numeral 1 artículo 77 de la ley 1448 de 2011. No es aplicable al caso especial que nos ocupa, el titular del derecho de dominio del predio solicitado es el señor Pedro Pablo Galindo Ramos. C.C. No 15.301.191 Cauca_ Antioquia, de ahí que no hay prueba alguna que los hubiesen condenado en los términos señalados en la normatividad mencionada.

En ese orden son aplicables las presunciones de los Literales a. b. numeral 2 del artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Ya

trascritas, según el acervo probatorio de este proceso y en consecuencia se decretarán los efectos jurídicos determinados por la normatividad mencionada.

7.2)_ Análisis probatorio de los elementos de la presunción. El Juzgado resaltaré la existencia de cada uno de los elementos anteriores y tendrá en cuenta las disposiciones que la Ley 1448 de 2011, introduce en esta materia, como lo son la inversión de la carga de la prueba (Artículo 78), la calidad de fidedignas de las pruebas aportadas por la Unidad de Restitución Dirección Territorial Antioquia y la procedencia de cualquier tipo de prueba, reguladas en la ley.

7.2.1)_ Temporalidad. La ocurrencia de los hechos a partir del año de 1991, el que se cumple a cabalidad, toda vez que el desplazamiento del solicitante señor Pedro Pablo Galindo Ramos. C.C. No 15.301.191 Caucaasia_ Antioquia y su grupo familiar ocurrió en el año 2009, tal y como se demuestra con pruebas rendidas en interrogatorio que obran dentro del proceso.

7.2.2)_ Contexto de violencia. Hecho notorio. Sabido es que la violencia en nuestro país generada por los grupos llamados "paramilitares" ha sido de tal magnitud y en ese sentido hubo una proliferación de la misma en el sector donde está ubicado el inmueble a restituir que la misma constituye un hecho notorio. El hecho notorio es aquel cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo. Según el Inciso 4 artículo 167 Ley 1564 de 2012_ Código General del Proceso. "Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba".

La Corte Suprema de Justicia en providencia del 27 de junio de 2012.M.P. Dra. María del Rosario González Muñoz, señaló : "Además, cuando se señala que la presencia paramilitar en vastas regiones del país constituye un hecho notorio, se pretende significar, como así lo ha entendido la Sala en su amplia jurisprudencia sobre el tema, que no necesita prueba específica que lo corrobore". (El resaltado fuera del texto original.)

Resultó indudable también que la actividad de esas organizaciones criminales ha conducido a afectar las reglas de convivencia social y en especial a la población civil en la cual ha recaído la mayoría de las acciones de estos grupos, motivadas generalmente por no compartir sus intereses, estrategias y procedimientos, y es así como en el afán de anteponer sus propósitos han dejado entre sus numerosas víctimas a servidores públicos de la administración de justicia, de la policía judicial, alcaldes y defensores de derechos humanos⁴⁷.

También lo ha sostenido la Corte, no obstante la vigencia y aplicación de la Ley 975 de 2005, el proceso de desmovilización todavía está en trámite, de modo que la actividad ilegal de los grupos paramilitares podría continuar en algunos casos, máxime que los

⁴⁷ Cfr. Me del 22 de mayo de 2008, radicación 29702. En sentido similar, auto del 23 de abril de 2009, radicación 31599

desmovilizados cuentan aún con el apoyo de sus seguidores, lo cual comporta elevado riesgo para el normal desarrollo de la administración de justicia⁴⁸.

En igual sentido, la Corte Constitucional, manifestó en sentencia No. T_354 de 1991.

"Es conocido el principio jurídico de que los hechos públicos notorios están exentos de prueba por carecer ésta de relevancia cuando el juez de manera directa al igual que la comunidad tiene establecido con certeza y por su simple percepción que algo en el terreno fáctico, es de determinada forma y no de otra".

7.2.3)_ La calidad de Víctima y el Daño. El concepto de víctima elaborado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido un amplio desarrollo toda vez que desde hace tiempo se ha venido estudiando sobre su definición y alcance, en virtud de las leyes que se han creado para su protección.

En tal sentido y con ocasión del examen de constitucionalidad de las leyes 600 de 2000, 742 de 2002, 906 de 2004, 1054 de 2010 y 1448 de 2011; la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el concepto de víctima de hechos punibles y de graves violaciones de derechos humanos, así como también del derecho internacional humanitario, al igual que sobre el alcance de sus derechos, lo que permite a hoy de tener claro el concepto de víctima, el cual va más allá de la definición que le da cada norma, puesto que si bien sus postulados tienen relación, cada definición allí contenida se enmarca en el ámbito de aplicación de cada ley y su respectiva finalidad por la cual se ha creado.

Por ejemplo en la Sentencia C_578 de 2002, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional, al referirse a los criterios de ponderación de los valores de justicia y paz, dijo la Corte Constitucional respecto de las personas que han de considerarse como víctimas:

"No obstante lo anterior, y con el fin de hacer compatible la paz con la efectividad de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario, el derecho internacional ha considerado que los instrumentos internos que utilicen los Estados para lograr la reconciliación deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta criminal, la posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y obtener la protección judicial efectiva. Por ello, el estatuto de Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, pero si las que son producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la justicia.

En suma, según el derecho constitucional, interpretado a la luz del bloque de constitucionalidad, los familiares de las personas que han sufrido violaciones directas a sus derechos humanos tienen derecho a presentarse ante las autoridades para que, demostrado el daño real, concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas, se les permita solicitar la garantía de los derechos que les han sido vulnerados. Esto no significa que el Estado está obligado a presumir el daño frente a todos los familiares de la víctima directa, Tampoco significa que todos los familiares tengan exactamente los mismos derechos. Lo que sin embargo sí se deriva de las normas y la jurisprudencia citada, es que la ley no puede impedir el acceso de los familiares de la víctima de violaciones de derechos humanos, a las autoridades encargadas de investigar, juzgar, condenar al responsable y reparar la violación.

⁴⁸ Cfr. Providencia del 23 de abril de 2009 antes citada.

Por las razones expuestas, la Corte considera que viola el derecho a la igualdad y los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a un recurso judicial efectivo las disposiciones de la Ley demandada que excluyen a los familiares que no tienen primer grado de consanguinidad con la víctima directa de la posibilidad de que, a través de la demostración del daño real, concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas de que trata la ley demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos de la mencionada Ley. También viola tales derechos excluir a los familiares de las víctimas directas cuando éstas no hayan muerto o desaparecido. Tales exclusiones son constitucionalmente inadmisibles, lo cual no obsta para que el legislador alivie la carga probatoria de ciertos familiares de víctimas directas estableciendo presunciones como lo hizo en los incisos 2 y 5 del artículo 5 de la ley acusada”.

Específicamente la sentencia C_370 de 2006, se ocupa de estudiar el concepto de víctima, al examinar la constitucionalidad de los artículos 5, 47 y 48 de la Ley 975 de 2005. En esa oportunidad los demandantes acusaban a estas disposiciones de fijar una definición restrictiva y excluyente de víctima, que a su vez limitaba la titularidad del derecho a un recurso judicial efectivo, de las medidas de rehabilitación y de satisfacción y de las garantías, de no repetición. Al respecto la Corte Constitucional resolvió los cargos manifestando que la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han entendido que son víctimas o perjudicados, entre otros, las víctimas directas y sus familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición de víctimas del delito, el grado de relación o parentesco.

“...Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que debe tenerse como víctima o perjudicado de un delito penal a la persona que ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó. Subraya la Corte que en las presunciones establecidas en los incisos 2 y 5 del artículo 5 se incluyen elementos definitorios referentes a la configuración de ciertos tipos penales. Así, en el inciso 2 se señala que la condición de familiar víctima se concreta cuando a la "víctima directa" se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida". Es decir, que los familiares en el grado allí señalado se tendrán como víctimas solo en tales supuestos. Esto podría ser interpretado en el sentido de que los familiares, aun en el primer grado establecido en la norma, no se consideran víctimas si un familiar no fue muerto o desaparecido. Esta interpretación sería inconstitucional por limitar de manera excesiva el concepto de víctima a tal punto que excluirla de esa condición y, por lo tanto, del goce de los derechos constitucionales propios de las víctimas, a los familiares de los secuestrados, de los que sufrieron graves lesiones, de los torturados, de los desplazados forzosamente, en fin, a muchos familiares de víctimas directas de otros delitos distintos a los que para su configuración exigen demostración de la muerte o desaparición. Esta exclusión se revela especialmente gravosa en casos donde tal delito recae sobre familias enteras, como sucede con el desplazamiento forzado, o donde la víctima directa estando viva o presente ha sufrido un daño psicológico tal que se rehúsa a hacer valer para sí misma sus derechos, como podría ocurrir en un caso como la tortura. Las víctimas que demuestren haber sufrido un daño real, concreto y específico, así como sus familiares que cumplan los requisitos probatorios correspondientes, pueden hacer valer sus derechos”.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C_052 de 2012 (ya transcrita) estudió la exequibilidad del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. El problema jurídico examinado en esa ocasión consistió en determinar si la limitación contenida en el inciso 2° del citado precepto, respecto del grupo de familiares de la víctima muerta o desaparecida que también se considerarán víctimas carecía de justificación y en tal forma resulta una medida discriminatoria, contraria al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.

Para resolver la cuestión planteada la Corte precisó el contenido normativo de las expresiones acusadas, las cuales determinan las víctimas beneficiadas de las medidas de atención, asistencia y reparación integral establecidas en dicho cuerpo normativo. Así, indicó que el artículo 3 contiene las reglas a partir de las cuales se definirá la aplicabilidad de las distintas medidas reparatoras frente a casos concretos, y a continuación comparó las Hipótesis contenidas en sus incisos 1° y 2°.

Afirmó la Corte que el inciso 1° de este artículo desarrolla el concepto básico de víctima, el que según el texto, necesariamente supone la ocurrencia de un daño como consecuencia de unos determinados hechos, e incluye también otras referencias, relacionadas con el tipo de infracciones cuya comisión generará los derechos y beneficios desarrollados por esta ley y con la época desde la cual deberán haber ocurrido esos hechos. Igualmente señaló que el inciso 2° fija una nueva regla en torno a quiénes serán considerados víctimas, regla que no hace directa alusión al hecho de que las personas allí previstas hayan sufrido un daño que sea resultado de los hechos victimizantes, pero que en cambio exige acreditar dos circunstancias fácticas que condicionan ese reconocimiento, como son la muerte o desaparecimiento de la llamada víctima directa y la existencia de una específica relación jurídica o de parentesco respecto de aquella. Puntualmente y referente al concepto de víctima se indicó:

“...Se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así, pese a que existen también otros criterios relevantes: el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende: que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en esta normativa. Ahora bien, es importante destacar que el Concepto de daño es amplio y comprensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable.”

La Corte Constitucional en sentencia del 28 de marzo de 2012, magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, después de hacer un estudio de las sentencias antes referenciadas y recoger todo lo allí analizado respecto al concepto de víctima concluye:

(a)... De los precedentes antes citados resulta relevante destacar, para los propósitos del presente proceso, que la Corte Constitucional ha acogido un concepto amplio de víctima o perjudicado, al definirla como la persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó. El daño sufrido no necesariamente ha de tener carácter patrimonial, pero se requiere que sea real, concreto y específico, y a partir de esta constatación se origina la legitimidad para que participe en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia y ser titular de medidas de reparación. Igualmente que se ha entendido que no se ajusta a Constitución las regulaciones que restringen de manera excesiva la condición, de víctima y que excluyan categorías de perjudicados sin fundamento en criterios constitucionalmente legítimos... “

En el mismo sentido la sentencia C_253 A del 29 de marzo de 2012, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

0..El Título I la Ley, se ocupa del concepto de víctima y en el artículo 3°, que es el que ha sido demandado en esta oportunidad se dispone que a los efectos de la ley, serán víctimas "aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado".

La Corte que previamente al pronunciamiento de exequibilidad de algunos apartes del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 contenido en la Sentencia C-280 de 2012, mediante Sentencia C_052 de 2012, se resolvió declarar la exequibilidad condicionada de algunos apartes de ese artículo que en criterio de los entonces demandantes, restringían el ámbito del concepto de víctima: La Corte encontró que el artículo 3 de la ley contiene las reglas a partir de las cuales se definirá la aplicabilidad o no de sus disposiciones frente a casos concretos, y que en su inciso 10 desarrolla el concepto básico de víctima, el que según el texto, necesariamente supone la ocurrencia de un daño como consecuencia de unos determinados hechos, e incluye también otras referencias; relacionadas con el tipo de infracciones cuya comisión generará los derechos y beneficios desarrollados por esta ley y con la época desde la cual deberán haber ocurrido esos hechos. En aspecto que es relevante para este caso, la Corte concluyó que la definición contenida en el inciso primero se predica de cualquier persona que ha sufrido daño como consecuencia de los hechos allí previstos, la cual puede, por consiguiente, invocar la calidad de víctima.

La sentencia en comento menciona el principio de buena fe y establece que en aplicación de este principio, la calidad que se enuncia de ser víctima, libera a esta de probar su condición, toda vez que se le da peso a la declaración de ella.

(.) La ley parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado interno y, en función de ello consagra los principios de buena fe, Igualdad de todas las víctimas y enfoque diferencial.

Así, el principio de buena fe está encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición. En la medida en que se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.

En lo relativo al daño la Corte Constitucional señaló:

"... pese a que existen también otros criterios relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en esta normativa. Ahora bien, es importante destacar que el concepto de daño es amplio y comprensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entra ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el

desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo “se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable.”

El solicitante Pedro Pablo Galindo Ramos. C.C. No 15.301.191 Caucaasia_ Antioquia, en el presente caso es víctima, toda vez que sufrió un daño, la pérdida del predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Caucaasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucaasia. (Daño que ocurrió en el año 2009, periodo que cubre expresamente la Ley, y que conllevó la pérdida de la posesión y el desplazamiento del predio antes descrito.

El solicitante en el presente caso ha probado su condición de víctima y el daño sufrido directa o indirectamente de la siguiente manera:

Las versiones rendidas en interrogatorio de parte ante esta judicatura. Que se transcriben a continuación son fiel reflejo del contexto de violencia en zona rural del Municipio de Caucaasia. Así:

: “(...) vivo en Nechí, fui desplazado en el 2010, soy bachiller, casado, tengo 3 hijos, vivo del rebusque, sufrí un glaucoma, estoy sobreviviendo de la parcelita.

El señor Eurblo Gertrudis de Hoyos, tenía la parcela, dos parcelas en una, él no tenía la capacidad para cultivar arroz, entonces me dijo que me vendía una parte de la parcela para él ayudarse; le di la plata por ese pedazo de tierra, la negociación con el señor Eurblo la hice hace más de 20 años.

He explotado la tierra en pasto para ganadería, en cría de gallina, cerdo, tengo ganado Cebú. Me considero dueño de la parcela.

Yo en la parcela tenía un sobrino, y trabajaba la tierra con mi sobrino, pero cuando tenía que hacer cosas grandes, buscaba gente para trabajar, a veces contrataba hasta el señor Eurblo.

Yo abandoné la parcela por desplazamiento, en esa época había un conflicto armado entre dos grupos, Águilas Negras y los Paisas en una hacienda que colinda con la parcela, se llama hacienda San Lorenzo; el dueño tuvo que desocuparla, ellos se apoderaron de ella, habían balaceras, mi parcela quedaba a unos 500 metros, pasaban los proyectiles, muchos de ellos acampaban ahí. Mi sobrino tenía cinco niños, muchos de ellos nos dijeron que no nos estaban echando pero que si era bueno que desocupáramos porque a toda hora había balacera.

Actualmente estoy explotando la parcela, yo iba de vez en cuando y ahí fue cuando me di cuenta que se me habían llevado los animales. En ese momento mi compañera se había ido por lo que estaba ocurriendo a otra parcela donde su mamá.

Me registré en la Personería Municipal como desplazado. Actualmente vivo en una casa de mi suegro en Nechí. Los vecinos me conocen como señor y dueño de la parcela.

Esa parcela la encontré con monte, esa tierra la mecanicé, hice potrero, cercado, tengo un corral, coco, algarrobo, mango, limón.

Quienes iban por allá era el ejército, pero un día hubo algo que me llamó tanto la atención, para ir a mi parcela había un grupo paramilitar y más adelante, a 300 metros el ejército, pasaba uno por las dos partes.

Tengo mi problema de la vista, y en cuanto a mis medicamentos es un problema, en tres meses me han entregado a penas una parte de lo que me debo tomar en un mes. Las gotas son para que no se me suba la presión, si se me sube la presión puedo quedar completamente ciego (...)"

(El resaltado fuera del texto original).

El interrogatorio realizado en sede judicial según los preceptos de la Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). A la letra señala claramente las presunciones de buena fe de las pruebas presentadas por la víctima en todas las actuaciones administrativas y judiciales, que cobijan el proceso que nos ocupa, fue la voluntad expresa del legislador en su gran poder de configuración la que colocó a las pruebas allegadas por las víctimas en un rasero totalmente distinto a las presentadas eventualmente por los opositores, es que de otra manera no se entendería la misma Ley. No hubo oposición en este proceso lo que nos dice que lo afirmado por la víctima no pudo desvirtuarse, las presunciones Legales invocadas por la parte demandante en defensa de los derechos del solicitante o reclamante.

Se trata de una Ley de stirpe transicional y de víctimas que han sufrido las inclemencias no solamente del conflicto armado como tal, sino de las consecuencias que le son de la esencia del mismo, como es el desplazamiento y abandono de sus bienes y pertenencias para convertirse en extraños en su propio país, en ocupantes a la fuerza de los cinturones de miseria de los barrios marginales. Donde no solamente ellos sino su grupo familiar de la noche a la mañana con todo perdido y careciendo de lo mínimo para el seguir vivir. (Artículo 89 Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y restitución de Tierras):

Luego esa selva de cemento sin conciencia que no conoce de sentimientos los absorbe llegando los mismos a desintegrarse como familia, cuando muchos de ellos caen en delito y las mujeres en las redes perversas de la prostitución.

Todas exposiciones están rodeadas de la presunción de buena fe y constituyen prueba fidedigna al tenor del artículo 89 de la Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y restitución de Tierras), tantas veces citada. La sentencia que se acaba de citar. (C_253 A/2012). En lo tocante al principio de la buena fe y su aplicación, nos ilustra al respecto en los siguientes términos:

"La ley parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado interno y, en función de ello, consagra los principios de buena fe, igualdad de todas las víctimas y enfoque diferencial

Así, el principio de buena fe está encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición. En la medida en que se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevar de la carga de la prueba".

7.3.)_ Prueba documental. La UAEGRTD _Dirección territorial Córdoba, da cuenta que el solicitante se encuentra inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, junto con su grupo familiar y la relación material con la tierra.

Informe Técnico Predial, Constancia de Inscripción del Predio en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente RUPTA, Reportes de la Fiscalía General de la Nación_ Unidad de Justicia y Paz sobre Inscripción en el Registro de Información SIJYP, Oficio Agencia Colombiana para la Reintegración, donde una vez consultado el SIR, este reporta que el solicitante no registra en el SIR como participante de la ACR.

7.4.)_ Tipo negocial (Elementos del tipo). El solicitante es el titular inscrito del derecho real de dominio de restitución del predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caucasia. El derecho de dominio lo adquirió mediante adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria mediante 1172 del 31 de julio de 1985

Ahora bien, remitiéndonos al suceso en que se le priva de la posesión al solicitante **Pedro Pablo Galindo Ramos**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, nos encontramos frente al hecho en el cual fueron maltratados, atemorizados y coaccionados a salir de la tierra que le fue adjudicada.

7.6)_ No se han desmentido en el expediente las palabras del solicitante de restitución, con respecto a lo sucedido en su predio, cuando relató sus vivencias, las acciones violentas a las que fue sometido, amedrentamiento, abandono y posterior desplazamiento de su parcela.

7.7)_ No puede la Judicatura hacer planteamientos distintos que no se dirijan a reconocer y valorar positivamente las palabras del hoy solicitante del área superficiaria de **Pedro Pablo Galindo Ramos**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, en nombre propio en relación con el predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucasia_ Sus relatos son acertados y honran la verdad porque es el rasero común del contexto social presentado en el Municipio de Cucasia, Departamento de Antioquía, se trata del mismo Modus operandi, para alterar el comportamiento placido y tranquilo de campesinos que trabajan la tierra día a día, para llevar el sustento diario a su familia, dentro de un marco de falencias económicas pero en un contexto social de dignidad humana, que los incluye a ellos y su familias:

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la

integran y en la prevalencia del interés general. (Artículo 1 de la Constitución política de 1991. (El resaltado fuera del texto general)

Las influencias de las amenazas y constreñimiento para abandonar el La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucaasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucaasia, alteró el sosiego de hombres y mujeres de campo que respiran paz por todos sus poros, para llegar a temer por su seguridad y por ende la vida de ellos y de su núcleo familiar y es ese el estado de ánimo que aprovechan las personas marcadas por la avaricia en un sendero de criminalidad el cual no está obligado a soportar el solicitante, con dos alternativas o se convierte en uno de ellos o abandona su terruño para salvaguardar su vida y la de sus familiares antes de caer en las pretensiones malsanas y perversas de esos grupos armados que sembraron el terror en Caucaasia y permearon todas las instituciones incluidas las de elección popular. No en vano fueron condenados congresistas, gobernadores y alcaldes, diputados a la Asamblea y concejales de municipios por favorecimiento a paramilitares.

Después del periodo de los amedrentamientos y despojo sigue inevitablemente el abandono de la región y la llegada a otra población, generalmente a ciudades intermedias donde los recién llegados no conocen a nadie y fácilmente pasan a engrosar los miles de personas sin trabajo, porque lo que ellos hacían en el campo no tiene demanda en la ciudad, entonces los espera una situación de pobreza extrema y un quebrantamiento de la dignidad humana, es que el hombre del campo sin su tierra carece de la principal herramienta de alimentación de su familia, su mínimo vital y el de su entorno se pone en peligro, no en vano la Corte Constitucional ha recalcado que la tierra es un derecho fundamental para el desplazado y también lo es el derecho a la restitución de la misma y el retorno para volver a empezar y tratar de olvidar las heridas que si no están sanas, el ansiado retorno a lo que se creía perdido tiene la facultad de ir cerrando grietas de dolor con optimismo de una nueva Colombia donde la paz regrese al campo de donde ellos jamás debieron salir.

Está demostrada la existencia de las presunciones legales de los Literales a. b. numeral 2 artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). En relación con la solicitud del señor **Pedro Pablo Galindo Ramos**. C.C. No 15.301.191 Caucaasia_ Antioquia, en nombre propio en relación con el predio denominado **La Esperanza** ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucaasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucaasia_ Las presunciones legales mencionadas que lo amparan no fueron desvirtuadas y mal podría serlo cuando

en el proceso que nos ocupa, no existen opositores. (Artículo 88 Ley 1448 de 2011_ Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

La sentencia T-979 _2005, de la Corte Constitucional, también explica en qué consiste la restitución en los siguientes términos:

“Restitución se realiza a través de acciones orientadas a devolver, en la medida de lo posible, a la víctima a la situación que se encontraba antes de ser afectada por el ilícito, tiene un alcance que trasciende lo meramente pecuniario en cuanto atañe al restablecimiento de todos sus derechos que le permitan continuar con una vida normal en su entorno social, familiar, de ciudadanía, laboral y económico.” En igual sentido la resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16 de diciembre de 2007.

La Corte constitucional en la sentencia C_820 de 2012_ dejó claro la normatividad aplicable a nivel internacional y local en lo relativo al derecho de restitución de la ley 1448 de 2011.

“En lo que toca de manera específica con el derecho a la restitución, este derecho ha sido regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas; e igualmente se encuentra consagrado en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng); y en los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro), que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato.

En el orden interno, el derecho a la restitución como parte esencial de la reparación integral, en conexidad con los derechos a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición, encuentra su fundamento constitucional en el Preámbulo y en los artículos 2, 29, 93, 229 y 250 de la Constitución Política, siendo derechos fundamentales y por tanto de aplicación inmediata. Así, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la restitución hace parte integral y esencial del derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

De los estándares internacionales, la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la restitución de las víctimas como componente preferencial y esencial del derecho a la reparación integral se pueden concluir las siguientes reglas:

- (i) La restitución debe entenderse como el medio preferente y principal para la reparación de las víctimas al ser un elemento esencial de la justicia reformativa.
- (ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que se las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzosamente sus territorios retornen o no de manera efectiva.

- (iii) El Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada para aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible o cuando la víctima de manera consciente y voluntaria optare por ello.
- (iv) Las medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias.
- (v) la restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a su situación anterior a la violación en términos de garantía de derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes.
- (vi) en caso de no sea posible la restitución plena, se deben adoptar medidas compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de indemnización como compensación por los daños ocasionados.
- (vii) el derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo de reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente”.

7.8)_ Las partes del proceso. En la solicitud impetrada, a través de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas _UAERTD_ _Dirección Territorial _ Córdoba- sede Caucasia, el solicitante tiene la calidad probada de víctima, poseyendo el predio denominado **La Esperanza** ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucasia, desde el año 1985 hasta el 2009 (En virtud a hechos violentos en la zona se vio obligado a desplazarse de la misma, y como lo manifestó en audiencia, la titularidad del derecho de dominio la tiene el mismo solicitante).

La víctima hoy reclamante, ingresó al predio objeto de restitución en calidad de propietario en el año 1985 aproximadamente saliendo desplazado en el año el año 2009, por la violencia que acampaba en la zona., de ésta forma quedó vinculado con el predio que hoy reclama y del cual sin contemplación alguna fue despojado junto con su núcleo familiar perdiendo la posesión del predio del predio que hoy reclama en restitución de tierras.

7.9)_ Consecuencias de las presunciones. Debe quedar claro que no es aplicable en este proceso las presunciones de derecho del No. 1 artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Lo anterior no es óbice para que no se pueda afirmar que las presunciones Legales del Numeral 2, literales a y b, artículo 77 Ley Ibídem son de jurídica aplicación y una vez declarada las presunciones legales mencionadas en el caso que nos ocupa del solicitante se genera la consecuencia jurídica de tener bajo el instituto jurídico de la Nulidad los actos administrativos o contratos posteriores si hubieren al abandono o desplazamiento que se celebren sobre la totalidad o una parte del bien.

7.10)_ Alinderamiento de los inmuebles o Parcelas. La Unidad de Gestión Administrativa y Restitución de Tierras Despojadas _ UAEGRTD _ Dirección Territorial Córdoba- Sede Cauca, en los documentos que aparecen en el cuaderno de anexos, y que tituló como Información Técnico Predial, alinderó el inmueble solicitado en restitución como se indicará en la parte resolutive de esta sentencia.

7.11)_ En este proceso, la titularidad del derecho de dominio en relación con la titularidad predio denominado **La Esperanza** ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Cauca, Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cauca, está en cabeza del mismo solicitante.

7.12)_ Relación Jurídica Demostrada con el Predio. Denominado **La Esperanza** ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Cauca _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cauca. _solicitado en restitución, fue debidamente inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente, tal como da cuenta la constancia expedida por parte de la UAEGRTD Territorial Córdoba- Sede Cauca, situación que habilita al solicitante para el ejercicio de la acción de restitución y formalización de tierras despojadas y/o abandonadas, buscando entonces ser beneficiario junto con su núcleo familiar, de las políticas públicas complementarias que deben acompañar a éste trámite especial.

Ahora bien el accionante manifiesta que el origen de la propiedad y de la posesión material del predio que ahora reclama en restitución y formalización, surgió en el año 1985 cuando les fue adjudicado mediante resolución No 1172 del 31 de julio de 1985 proferida por el Incora.

Valorada la prueba de recepción de interrogatorio se tiene que las declaraciones rendidas por el solicitante en etapa Judicial, son concordantes al afirmar que los actos de uso y goce de los que da derecho al dominio, llevados a cabo por parte del solicitante PEDRO PABLO GALINDO RAMOS. C.C. No 15.301.191 Cauca, Antioquia, en relación con el predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Cauca _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP Montería, fueron ejecutados con la convicción de señor y dueño, y que por esa razón, respondió exclusivamente por el mejoramiento del mismo destinándolo principalmente a su habitar, de ahí que construyó su casa en dicho inmueble y realizaba cultivos para su subsistencia y la de su grupo familiar. Entonces la

predicada disposición material del predio, aparejaba un factor psicológico propio de dueño, conformándose lo que el ordenamiento jurídico.

Ha denominado como el hecho de la posesión de los bienes, la que por demás es esencial para adquirir el dominio por el camino de la prescripción adquisitiva.

Ha de tenerse en cuenta también que para efectos de la aplicación de la ley 1448 de 2011, al presente caso, la posesión debe ser contextualizada a la realidad jurídica que impera en la comunidad de la que forma parte el reclamante, para ser flexibilizadas y adaptadas a las relaciones jurídicas que se generan en aquellas localidades a fin de proveerlas de la correspondiente validez jurídica, por tratarse del grupo poblacional que fue víctima del uso riguroso de los esquemas y figuras solemnes que devienen del derecho privado, o por tratarse de un sector afectado por la violencia armada interna, en donde las reglas de ese tipo de derecho son visualizadas desde una óptica distinta a la utilizada por la comunidad en general a causa de sus especiales y diferentes características humanas, sociales y culturales, etc., en aplicación del principio de igualdad material, según quedó anunciado en acápites anteriores a éstas consideraciones.

De manera que el cumplimiento del elemento subjetivo de la posesión relativo al animus domini debe examinarse desde la perspectiva de dicha comunidad para ajustarse a las prácticas jurídicas del contexto del solicitante, conforme a las pruebas visibles en relación al caso, de un modo más flexible y dúctil, y desde esa percepción suave del derecho privado es posible que el cumplimiento del ánimo de señora y dueña que se requiere en la posesión del predio pudiera verse satisfecho de acuerdo con usos jurídicos de la comunidad a la que pertenece el reclamante.

Además la forma pacífica de ejercer ese tipo de posesión predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Cauca _ Departamento de Antioquia, área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP Cauca.

A fecha no existe controversia alguna para desconocer los derechos que el reclamante manifiesta tener sobre el inmueble solicitado en restitución de tierras; y el ejercicio público se debe a ese reconocimiento comunitario que le imputa su condición de dueño sobre dicho bien; y si hubo una probada interrupción de hecho pero no jurídica al tenor de la Ley 1448 de 2011, durante el ejercicio de la posesión se constata a partir de las pruebas que empezó a explotar el predio en el año 1985, salió desplazado en el año 2009.

7.15)_ Conclusión. Se encuentran probados los supuestos de hecho de las presunciones legales de los literales a. b. Numeral 2 del artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). En consecuencia habrá lugar a decretar la restitución jurídica y material del predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Cauca _ Departamento de Antioquia,

área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP Caucasia, con las consecuencias jurídicas de rigor.

El titular del derecho de dominio no se reconoce como opositor dentro del proceso., ya que manifestó en escrito que presentó a esta judicatura que no se oponía a la solicitud de restitución.

7.18. FALLO

En mérito de lo expuesto **EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE MONTERÍA**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley.

RESUELVE

1.) **_Declarar.** La existencia de las Presunciones legales de los Literales a. b. Numeral 2 del artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). De la solicitud del señor **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, en relación con el predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caucasia.

2.) **_ Ordenar.** La protección del Derecho Constitucional Fundamental a la Restitución y Formalización de Tierras Abandonadas o Despojadas, a Causa del Conflicto Armado Interno a favor de la Víctima Reclamante **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, en relación con el predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caucasia. Fundamento jurídico en la existencia de las Presunciones Legales de los Literales a. b. numeral 2 artículo 77 Ley 1448 de 2011. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

3.) **_ Ordenar.** La Restitución Material al reclamante **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean**. C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba, en relación al predio objeto de restitución denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Caucasia.

Solicitantes	Compañera Permanente	Nombre Y ubicación del predio.	C.T.L. de Matrícula Inmobiliaria	Cédula Catastral del Inmueble	Área Superficiaria Georreferenciada	Titular Derecho de Dominio
--------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

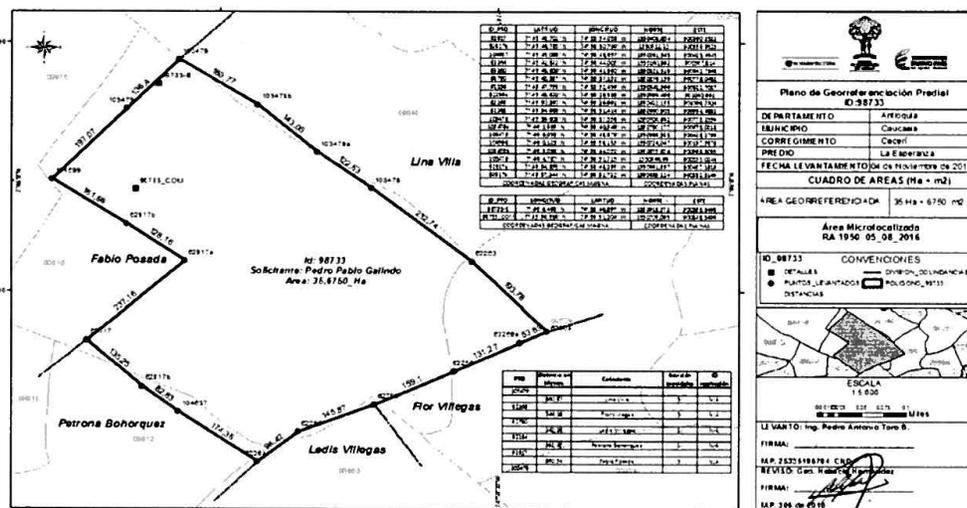
PEDRO PABLO GALINDO RAMOS. C.C. No. 15.301.191 Caucasia_ Antioquia	Modesta del Carmen Zabaleta Alean. C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba.	La Esperanza Vereda La Unión- corregimiento de Cacerí _ Caucaasia _ Antioquia.	015-13909 ORIP Caucasia	0515420 0400000 0200010 0000000 00	35 hectáreas 6.750 M ²	Pedro Pablo Galindo Ramos.
--	---	--	----------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO

Norte	Partiendo desde el punto 103479 en línea quebrada que pasa por los puntos 103478b, 103478a, 103478, 62263 en dirección suroriente hasta llegar al punto 62268 con Lina Villa en 860,87 metros con cerca de por medio.
Oriente	Partiendo desde el punto 62268 en línea quebrada que pasa por los puntos 62256a, 62256 en dirección suroccidente hasta llegar al punto 62790 con Flor Villegas con cerca de por medio en 344,19 metros.
Sur	Partiendo desde el punto 62790 en línea quebrada que pasa por los puntos 62280 en dirección Suroccidente hasta llegar al punto 62264 con Ledis Villegas con cerca de por medio en 242,28 metros. Continua desde el punto 62264 en línea quebrada que pasa por los puntos 104637, 62817b en dirección noroccidente hasta llegar al punto 62817 con Petrona Bohórquez con cerca de por medio en 392,43 metros.
Occidente	Partiendo desde el punto 62817 en línea quebrada que pasa por los puntos 62817a, 62817b, 104599, 103479 a en dirección Norte, hasta llegar al punto 103479 con Fabio Posada con cerca de por medio en 860,34 metros y encierra.

PUNTO	COORDENADAS PLANAS		COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
	NORTE	ESTE	LATITUD (° ' ")	LONG (° ' ")
62817	1350403,634	900260,2522	7° 45' 49,701" N	74° 58' 54,058" W
62817b	1350312,22	900359,9323	7° 45' 46,733" N	74° 58' 50,799" W
104637	1350261,545	900425,4545	7° 45' 45,088" N	74° 58' 48,657" W
62264	1350160,892	900567,814	7° 45' 41,822" N	74° 58' 44,005" W
62280	1350221,519	900642,7845	7° 45' 43,800" N	74° 58' 41,562" W
62790	1350276,139	900778,0452	7° 45' 45,587" N	74° 58' 37,152" W
62256	1350342,366	900922,7017	7° 45' 47,753" N	74° 58' 32,436" W
62256a	1350399,486	901040,891	7° 45' 49,620" N	74° 58' 28,583" W
62268	1350422,133	901089,7304	7° 45' 50,360" N	74° 58' 26,991" W
62263	1350560,905	900954,4832	7° 45' 54,868" N	74° 58' 31,414" W
103478	1350706,932	900773,2559	7° 45' 59,608" N	74° 58' 37,338" W
103478a	1350780,177	900675,0218	7° 46' 1,985" N	74° 58' 40,549" W
103479	1350966,525	900426,2799	7° 46' 8,033" N	74° 58' 48,679" W
104599	1350724,047	900197,3579	7° 46' 0,125" N	74° 58' 56,133" W
103478b	1350875,674	900568,5055	7° 46' 5,086" N	74° 58' 44,032" W
103479a	1350866,99	900333,0244	7° 46' 4,787" N	74° 58' 51,715" W
62817a	1350561,557	900437,1818	7° 45' 54,853" N	74° 58' 48,295" W
62817b	1350635,224	900332,3149	7° 45' 57,244" N	74° 58' 51,722" W

Plano Cartográfico



3.1)_ **Se ordena.** A la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cauca, la cancelación inmediata de todo antecedente registral sobre gravámenes y limitación del dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, y las medidas cautelares registradas posterior al despojo o abandono, así como la cancelación de sus correspondientes asientos e inscripciones registrales, en relación al predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Cauca _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Cauca.

4.)_ **Ordénese.** La inscripción de ésta sentencia en relación al predio denominado **La Esperanza** ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Cauca _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Cauca.

5.)_ **Ordenar.** A la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cauca, le dé aplicación a la protección que menciona Ley 387 de 1997, al inmueble restituido siempre que los beneficiarios de la presente acepten o consienta la medida jurídica mencionada.

6.)_ **Ordenar.** A la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cauca, que en aplicación del artículo 101 Ley 1448 de 2011, inscriba la prohibición de enajenar el predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí, Municipio de Cauca _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Cauca. (Remítase a la mencionada entidad estatal la constancia de la entrega material del predio al solicitante para efectos del conocimiento de la fecha que empieza a regir la prohibición de los dos (2) años.)

7.)_ **Ordenar.** A la Fuerza Pública. I. Séptima División del Ejército Nacional_DIV07. II. La Policía Nacional del Departamento de Antioquia_ DEANT. III. El Distrito Especial de Policía de Cauca , brindar el acompañamiento y la seguridad del caso en la diligencia de entrega material a **Pedro Pablo Galindo Ramos**. C.C. No 15.301.191 Cauca_ Antioquia, y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean**. C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba, el predio restituido denominada La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Cauca _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Cauca,

8.)_ **Ordenar.** Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi_ (IGAC), que en el término de un (1) mes realice la actualización de sus Registros Cartográficos y Alfa Numéricos, atendiendo la individualización e identificación del predio o Parcela restituida, lograda con los levantamientos topográficos y los informes técnicos catastrales anexos en la demanda. El término anterior se contará a partir de la Calificación realizada que reciba de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cauca en relación con esta sentencia y el único predio restituido.

9.)_ **Se ordena.** Al Municipio de Caucasia, Antioquia, la obligación de dar aplicación jurídica del: “Sistema de alivio y/o exoneración de cartera morosa del impuesto predial u otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal relacionado con las parcelas restituidas o formalizadas”. (No. 1 artículo 121 Ley 1448 de 2011_ Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Se relaciona a continuación al predio a beneficiar con la aplicación del Acuerdo mencionado, predio denominado La Esperanza ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, área superficial georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucasia

10.)_ **Ordénese.** En aplicación del principio de Prevención y de la Garantía de no Repetición, a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que comunique a todos los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos de los municipios pertenecientes al Bajo Cauca Antioqueño, reportar, por su conducto, de manera inmediata y durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011, toda solicitud de inicio de trámites notariales y/o registrales, relacionados con actos de enajenación o transferencia a cualquier título, constitución de gravámenes o celebración de cualquier negocio jurídico, sin importar su denominación, cuyo objeto, directo o indirecto, lo constituya el predio aquí restituido, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, y a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, que trata el artículo 201, ibídem, para que dentro del ámbito de sus competencias, adopten las medidas necesarias tendientes a garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble, cuya propiedad, posesión u ocupación han sido defendidas en este proceso, así como la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de la persona restituida, mediante la presente providencia judicial. Con fundamento los artículos 91, Parágrafo 1, y 97, ibídem, las entidades mencionadas informaran a este Juzgado mínimo cada cuatro (4) meses, el resultado de su gestión.

11.)_ **Ordenar.** Al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas _UAEGRTD_ Dirección Territorial Córdoba, aplique los alivios de cartera en el 100% sobre obligaciones contraídas por las Víctimas con empresas de servicios públicos y/o con entidades del sector financiero.

11.1)_ **Ordenar.** Al fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAERTD, Dirección Territorial Córdoba, Sede Caucasia, otorgar un proyecto productivo a **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean**. C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba, teniendo en cuenta la vocación del predio restituido.

12.)_ **Se Ordena.** A la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas _ (UAEGRTD- Dirección Territorial Córdoba. Postule al restituido **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean**. C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba, ante el **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR**, para el otorgamiento del **Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural VISR.**, en los tres (3) días siguientes a la Adjudicación que profiera la Agencia Nacional de Tierras_ ANT, a nombre de la restituida en mención. Artículo 45 del decreto 4829 de 2011 y el Decreto 890 de 2017. Indicando al

juzgado los tiempos de inicio de los proyectos y desarrollo, información que debe presentar dentro de los treinta (30) días siguientes. (So pena de las sanciones de ley al representante legal y todas aquellas personas encargadas del tema en esas entidades estatales). (Literal p. Artículo 91 ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

13.)_ Se ordena. Como medida con efecto reparador, y con apoyo en lo previsto en el literal p) del artículo 91 ley 1448 de 2011, se entere de esta decisión en virtud de sus competencias constitucionales y legales, a los entes territoriales Municipio de Cauca, Departamento de Antioquia, La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras_ UAEGRTD_ Dirección Territorial_ Córdoba _ _ . La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (UARIV). El Instituto Nacional de Aprendizaje _ (SENA)_ y El Distrito Militar No. 61 de Cauca.

14.) _Ordénese. A la Secretaría de Salud del Municipio de _ Cauca_ Antioquia, que de manera inmediata realice la inclusión de las personas favorecidas con esta sentencia y su núcleo familiar al Sistema General de Salud, en caso de no encontrarse ya afiliados al mismo.

14.1)_ Se ordena. Al municipio de Cauca_ Antioquia, que a través de la Secretaría de Salud, o quien haga sus veces, en ayuda con las entidades responsables a nivel institucional, como Empresas Sociales del Estado, Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, Empresas Promotoras de Salud, entre otras, los coparticipes, aliados estratégicos que hacen parte del programa, les garantice a ellos, y a su núcleo familiar, la asistencia en atención Psicosocial, por lo que deberán ser evaluados por un grupo de profesionales interdisciplinarios, para que emitan su correspondiente concepto, de acuerdo a las necesidades particulares que requieran , incluyendo al acceso a la medicinas, además deberán incluirse, en los programas de atención preventiva y protección que ofrece el municipio a las víctimas.

15.)_ Se ordena. Como medida con efecto reparador, con fundamento en el literal p) del artículo 91 Ley 1448 de 2011, al **Distrito Militar No. 61 Cauca, Antioquia, Sede Batallón de Infantería No. 13 Rifles.** Adelantar los trámites pertinentes en favor de los miembros varones del grupo familiar del restituido **Pedro Pablo Galindo Ramos.** C.C. No 15.301.191 Cauca_ Antioquia y su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean.** C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba, al tenor legal y el auto de seguimiento No. 008 de 2009, sentencia T-579 de 2012 del máximo tribunal constitucional de Colombia.

16)_Ordénese. Al Ministerio de Trabajo. La Regional Antioquia del SENA, en el municipio de Cauca _Bajo Cauca antioqueño. A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (UARIV). Para que diseñen y pongan en marcha los programas de empleo rural y urbanos referidos en el Título IV, capítulo I, artículo 67 del Decreto 4800 de 2011 y dirigido al beneficio de la población víctima reconocida en esta sentencia. Las dos primeras entidades en mención a través de la implementación del Programa de Empleo y Emprendimiento, denominado Plan de Empleo Rural y Urbano, que se encuentra estipulado en el título IV, capítulo I del artículo 68 de la misma normatividad.

17.) **Se ordena.** Al SENA Regional Antioquia del Municipio de Caucasia Antioquia, que registre a los restituidos **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean**. C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba, en la Bolsa de Empleo reconociendo el estado de vulnerabilidad que demanda especial atención y acompañamiento de las entidades del Estado.

18.) **Se Ordena.** Al **Departamento para la Prosperidad Social (DPS)** que registre a los señores **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean** . C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba, y su núcleo familiar en el Programa de Red Unidos, en razón a su estado de vulnerabilidad y víctima que demanda especial atención y acompañamiento de las entidades del Estado.

19.) **Se Ordena.** A la **Agencia Nacional para Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE)**. Que registre a los señores **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS**. C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean**. C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba y su núcleo familiar en Programas que puedan beneficiarlo en razón a su estado de vulnerabilidad y víctima que demanda especial atención y acompañamiento de las entidades del Estado.

20.) **Se ordena.** A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (UARIV). Que es su obligación coordinar y articular el diseño de acciones en conjunto con las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, con sujeción al seguimiento que se efectúe en el marco de los Comités de Justicia Transicional, en los términos de los artículos 74 y 76 del Decreto 4800 de 2011. (Lo anterior en aras de garantizar el retorno y reubicación del solicitante y reclamante víctima favorecida con ésta sentencia).

21.) **Ordena.** A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (UARIV). La implementación de los esquemas especiales de acompañamiento, que se han de elaborar previamente para atender de manera prioritaria el retorno de las víctimas restituidas de conformidad con lo establecido en el artículo 77, parágrafo 1,2, 3 del Decreto 4800 de 2011.

22.) **Se ordena.** A la Unidad de Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (UARIV). Con la finalidad de ejecutar los planes de retorno o reubicación que ella coordina y dirige, le haga saber a las demás autoridades del orden nacional, departamental o local la obligación de aportar e involucrarse de manera positiva en el proceso de atención, asistencia y reparación a las víctimas en materia de salud, educación, alimentación, situación especial de menores de edad (ICBF). Identificación (Registraría Nacional del Estado Civil). Servicios públicos básicos, vías y comunicaciones entre otros, conforme a lo establecido en el artículo 75 Decreto 4800 de 2011.

23.) **Se ordena.** A la Comisión de Seguimiento y Monitoreo la verificación de las responsabilidades institucionales de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. (UARIV). Con relación al cumplimiento de las

órdenes judiciales emitidas en materia de retorno y reubicación de las víctimas restituidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la ley 1448 de 2011.

24.) **_Ordénese.** Al Ministerio de Trabajo. Al SENA. A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (UARIV). Para que diseñen y pongan en marcha los programas de empleo rural y urbanos referidos en el Título IV, capítulo I, artículo 67 del Decreto 4800 de 2011 y dirigido al beneficio de la población víctima reconocida en ésta sentencia. Las dos primeras entidades en mención a través de la implementación del Programa de Empleo y Emprendimiento, denominado "Plan de Empleo Rural y Urbano", que se encuentra estipulado en el título IV, capítulo I del artículo 68 de la misma normatividad.

25.) **_Se ordena.** A las entidades mencionadas con órdenes en el resuelve de ésta sentencia, presentar en la Secretaría de este Juzgado cada seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de éste Fallo un informe de los respectivos Avances de su Gestión. (La falta de informe se tendrá como una negativa al cumplimiento de lo ordenado y amerita que se le compulse copias al ente encargado del control Disciplinario y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, en relación con el funcionario renuente.) Artículo 102 de la Ley 1448 de 2011.

26.) **_Advertir.** a las diferentes entidades receptoras de las órdenes emitidas en esta providencia, que para el cumplimiento de estas deben actuar de manera armónica y articulada, según lo dispuesto en el artículo 26 Ley 1448 de 2011, para ubicar a las víctimas reconocidas en esta sentencia y obtener información en relación a las mismas pueden ponerse en contacto con la **Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas _Dirección Territorial Córdoba._** Sede Caucasia (Área jurídica o social).

27.) **_ Se ordena.** Al Municipio de Caucasia _Antioquia, que incluya en el "Programa de Adulto Mayor" al restituido **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS.** C.C. No 15.301.191 Caucasia_ Antioquia, y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean.** C.C No 21.638.884 Sahagún _Córdoba por ser víctimas en estado de vulnerabilidad que demanda atención especial y acompañamiento de las entidades del Estado.

28.) **_ Sin condena en costas.** De acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. (El titular del derecho de dominio de la parcela objeto de restitución no presentó oposición jurídica alguna).

29) **_ Se ordena.** Comisionar al Juzgado Promiscuo Municipal de Caucasia _Antioquia. Para efectos de la Diligencia de Entrega Material del predio **La Esperanza** , restituido a **PEDRO PABLO GALINDO RAMOS,** y a su compañera permanente **Modesta del Carmen Zabaleta Alean.** Área superficiaria georreferenciada de 35 hectáreas 6.750 M² Certificado Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria No. 015-13909 ORIP_ Caucasia., ubicado en la Vereda La Unión_ corregimiento de Cacerí _ Municipio de Caucasia _ Departamento de Antioquia, cuya restitución se ordenó en esta sentencia. **El Juez Comisionado.** Está obligado a coordinar con la entidad demandante Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-**UAEGRTD_ Dirección Territorial _ Córdoba.** (Sede Caucasia). Y la Fuerza

Pública que se mencionó en el No. 7.)_ de este resuelve, para el cumplimiento de la diligencia ordenada. (En los términos del artículo 100 Ley 1448 de 2011_Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

30.)_ **Se ordena.** Por Secretaría expedir absolutamente todos los oficios y comunicaciones de rigor para el jurídico y material desarrollo y cumplimiento del resuelve de ésta sentencia.

31.) _ **Notifíquese.** Esta providencia a las partes por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


RUBÉN ANTONIO PESTANA TIRADO
Juez